

# VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

## DESCRIPCIÓN BOLETÍN 11077-07

REFERENCIA	Sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
INICIATIVA	Mensaje presidencial
ORIGEN	Cámara de Diputados
MINISTERIOS	Del Interior y Seguridad Pública, De Hacienda, De Desarrollo Social, De Educación, De Justicia y Derechos Humanos, Del Trabajo y Previsión Social y De Salud, y De la Mujer y de Equidad de Género.
INGRESO	5 de enero de 2017
ARTICULADO	Treinta y un artículos permanentes y un artículo transitorio; los artículos permanentes se agrupan en los siguientes títulos: TÍTULO I Objeto de la ley y Definiciones generales (arts. 1º a 7º); TÍTULO II De la prevención de la violencia contra las mujeres (arts. 8º a 11); TÍTULO III De la protección y atención de las mujeres frente a la violencia (arts. 12 a 18); TÍTULO IV Acceso a la justicia (arts. 19 a 31)


## **OPINIÓN** EJECUTIVA DE LYD

A pesar de su extensión, el proyecto solo trae ajustes de la normativa vigente que, no obstante, pueden producir cambios sustanciales para el ordenamiento jurídico, ya que parte importante de su articulado se remite o repite la normativa vigente, pero dándole una nueva orientación. Está constituido sobre todo por el uso de una nomenclatura consistente con la ideología de género, proyectada sobre normas legales vigentes.

Más importante sería mejorar la situación de inseguridad de quienes viven en una población; dar mayores recursos a programas ya existentes en el país tanto para hombres como para mujeres, como Centros de la Mujer, Casas de Acogida, Centros de Hombre (que proporciona atención especializada a aquellos hombres que han ejercido agresión contra sus parejas o también que la hubieren sufrido).

Está bien fortalecer la administración de justicia, pero con una ley general que no solo beneficie a algunos en razón de su sexo. Es contradictorio pretender, por una parte, educar a la población a favor de la igualdad, y por otra, abocarse a la creación de derechos de aplicación exclusiva para solo una parte de la sociedad.

Si lo que se plantea mejorar es la situación de la mujer en nuestro país, la misión sería diseñar y coordinar políticas públicas que propendan a la igualdad de oportunidades tanto para hombres y mujeres en todos los ámbitos del quehacer nacional, culturales y educacionales. No se justifica la implementación de fórmulas que intentan resolver este problema a través de ajustes legislativos.

Por último, el proyecto vulnera expresamente la prohibición constitucional de imponer como sanción la pérdida de derechos previsionales; la vulnera al establecer esa consecuencia en caso de parricidio. Asimismo, cabe estudiar si el sistema legal diferenciado que este proyecto establece, puede vulnerar el principio de igualdad ante la ley, que es el pilar fundamental de todo el ordenamiento jurídico y de las garantías constitucionales .

## **CONTENIDO DEL** **PROYECTO DE LEY**

Crea un nuevo derecho para las mujeres a una vida libre de violencia, que introduce una serie de modificaciones que incluyen una nueva modalidad de femicidio<sup>1</sup> por el homicidio de parte del conviviente (civil o de hecho) o su pareja y nuevos delitos. Además, modifica la regulación de las pensiones de sobrevivencia, en caso de que uno de los beneficiarios legales haya sido condenado por homicidio o femicidio del causante.

Los preceptos más destacables son los siguientes:

- Se amplía el concepto de violencia contra las mujeres, incluyendo ahora la violencia económica y la violencia simbólica.
- Las facultades del SERNAMEG <sup>2</sup> se amplían, aumentando el rango de casos en que pueda asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctima de violencia intrafamiliar, y se permite deducir querrela en casos de femicidio.
- En los procesos penales, no se podrá aplicar la atenuante de responsabilidad penal establecida en el artículo 11 N° 5 del Código Penal a favor del victimario cuando esta se funde en estereotipos que refuerzan la violencia contra las mujeres.
- Se considera constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato de parte de una persona que sea o haya sido cónyuge o conviviente civil o de hecho, sea del mismo o diferente sexo.
- El juez tomará en especial consideración el hecho de existir una o más condenas por actos de violencia familiar que no constituyen delito en la determinación de los regímenes de cuidado personal y el de relación directa y regular entre una persona y sus hijos.
- En las causas sobre violencia intrafamiliar, si llegado el día de la celebración de las audiencias no concurre ninguna de las partes, el juez citará a las partes de forma inmediata a una nueva audiencia.
- El sometimiento a mediación entre las partes no se aplicará cuando el agresor tenga hijos o una relación de pareja con o sin convivencia con la víctima, ni tampoco cuando una de las partes haya sido condenada por delitos constitutivos de violencia intrafamiliar.

<sup>1</sup> Dadas las normas de derivación nominal, lo correcto sería "feminicidio". No obstante, se utilizará el término "femicidio" acuñado por la ley 20.480. Nótese que la Real Academia Española incorporó en la edición N° 23 de su Diccionario de la Lengua, el término "feminicidio".

<sup>2</sup> Servicio Nacional de la Mujer y de Equidad de Género.

- El delito de parricidio, que ya tiene por nombre femicidio cuando la víctima del delito es o ha sido la cónyuge o conviviente civil, también tendrá esta denominación, cuando tuviere o haya tenido una relación de pareja sin convivencia con el autor del delito, o fuere conviviente de hecho.
- El condenado por parricidio (o femicidio) de la persona afiliada a una AFP, no tendrá la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivencia.
- Se establece como delito el difundir sin autorización y por cualquier medio, imágenes o videos de una persona mayor de 18 años, aún si se hubieran obtenido con su consentimiento, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad de la persona ■■■

## IV. COMENTARIOS DE MÉRITO EN GENERAL

El proyecto de ley se enmarca dentro del concepto de ideología de género, que es una derivación del feminismo de equidad, que busca una paridad de los sexos y pretende para la mujer lo mismo que para todos, es decir, un trato justo y sin discriminación.

El feminismo de género, en cambio, sustituye el sexo por el género y le otorga a éste el carácter de una construcción social, separadamente de una diferenciación natural. El género, por lo tanto, pasa a ser elegible, y esa elección debe poder efectuarse al margen de los roles que históricamente se les han asignado al hombre y a la mujer. Ésta, por lo demás, habría sido la parte débil en una historia interpretada como confrontación entre el poder de unos y la subordinación de otros. En este esquema doctrinario la mujer resulta subordinada al varón y debe recibir una protección especial que le permita ejercer todos sus derechos, incluyendo derechos reproductivos que se relacionan con la decisión unipersonal de la mujer frente al embarazo o a su interrupción.

Como dato anexo, cabe señalar que esta ideología tuvo especial significación en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por su sigla en inglés), instrumento jurídico dedicado exclusivamente a los derechos humanos de la mujer.

Como resulta obvio, el respeto a todas las personas no está en discusión, así como la igualdad de derechos entre hombres y mujeres que garantiza la Constitución Política (artículo

19 N°2) al declarar que “hombres y mujeres son iguales ante la ley”.

Por otra parte, desde el año 2005 existe la ley de Violencia intrafamiliar (ley N° 20.066) que protege a mujeres del maltrato que afecta sus vidas o su integridad física o psíquica dentro de la familia. El proyecto que ahora se comenta, pretende ampliar su esfera de protección a las mujeres más allá del contexto familiar, creando un derecho de aplicación exclusiva a las mujeres lo que genera, como consecuencia, una desigual protección en la población en general.

La “perspectiva de género” (expresión que utiliza el proyecto) ha ido generando, paulatinamente, una abundante normativa, incluso de rango constitucional, que ha establecido expresamente normas a favor de la mujer de manera innecesaria, puesto que todo lo que se aplica al hombre, en cuanto ser humano, es también aplicable a la mujer. El Código civil ya se hizo cargo de esta situación en el artículo 25: “Las palabras hombre [...] que en su sentido general se aplican a individuos de la especie humana sin distinción de sexo, se entenderán comprender ambos sexos en las disposiciones de las leyes, a menos que por la naturaleza de la disposición o el contexto, se limiten manifiestamente a uno solo”.

El uso actual, consistente con la perspectiva de género, contradice tanto al Código Civil como a las normas gramaticales y ahora se acostumbra a referirse a “ellos y ellas”, “niños y niñas”, “ciudadanos y ciudadanas”, “chilenos y chilenas”, etcétera.

Incluso en la Constitución Política se agregó en 1999 la expresión “hombres y mujeres son iguales ante la ley”, como recordó recién, lo que era innecesario según el Código Civil, pero se trataba de materializar en la Constitución una mención específica a la mujer, lo que fue un gesto hacia quienes apoyan la ideología de género, para lo cual se requiere una diferenciación a nivel normativo.

A mayor abundamiento, la Constitución reconoce y ampara derechos esenciales que emanan de la naturaleza de todos los seres humanos por el solo hecho de ser tales, garantizando entre otros la libertad e igualdad en dignidad y derechos, obviamente para hombres y para mujeres, y estableciendo que en Chile no hay persona ni grupo privilegiados que puedan pasar por sobre esas garantías, entre las cuales se encuentra el derecho a vivir con respeto a la integridad física y psíquica de las personas.

El respeto universal de los derechos del hombre, incluyendo a la mujer, está confirmado por numerosas declaraciones y convenciones internacionales que protegen los derechos fundamentales, dentro de las cuales se destaca, entre las naciones americanas, la Convención Americana sobre derechos humanos denominada “Pacto de San José de Costa Rica”, que viene a consolidar entre los Estados parte un régimen de libertad personal y justicia social consagrando los deberes de los Estados y los derechos que han de proteger. Entre el catálogo de derechos que consagra el Pacto, se encuentran el derecho a la vida (Artículo 3); el derecho a la integridad personal (Artículo 4), que abarca tanto la integridad física, psíquica y moral de la persona; y la igualdad ante la ley (Artículo 24).

La referida Convención (al igual que todas las que tratan sobre los derechos del ser humano) tienen un valor supra legal, generalmente aceptado, cuando se hubieren incorporado al ordenamiento jurídico nacional; pero tienen un carácter infra constitucional, en la medida que no puede sostenerse que estén en el mismo rango normativo que la Constitución ni mucho menos por encima de ella; en este punto, no obstante, existen notables diferencias entre los constitucionalistas. Afirmar que los convenios sobre derechos humanos han limitado al Poder Constituyente parece un exceso. Lo que sí es cierto, es que las normas a que se refiere el artículo 5°, inciso segundo, de la Constitución obligan a las autoridades: “[...] Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos [los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana], garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. La interpretación sostenida por parte de la doctrina, en el sentido de que esos tratados podrían modificar automáticamente la Constitución, no resulta aceptable.

Dado que la doctrina de género es un fenómeno generalizado, se han suscrito diversos acuerdos internacionales y han crecido las tendencias a beneficio exclusivo de las mujeres, en el sentido de darle mayor autonomía y independencia, alejándose de lo que históricamente se ha buscado, como lo es la igualdad ante la ley entre ambos sexos. Los componentes feministas, cuando se exageran, pueden infringir el deber del Estado de promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el Derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

Por otra parte, hoy día ha habido mayor sensibilidad de parte de la población ante episodios de maltrato dentro de la vida familiar, observándose un paulatino cambio cultural en la actitud del entorno familiar frente a las mujeres. Ello es positivo, pues en último término, el respecto por las mujeres es una cuestión cultural más que legal.

Apuntar solo a proteger y erradicar la violencia contra las mujeres, es una medida incompleta, ya que la sociedad y los gobiernos deberían luchar contra la violencia en general y no solamente contra un tipo específico. Se deben incentivar las políticas de igualdad entre hombres y mujeres en lugar de privilegiar un género determinado.

## ALGUNOS DATOS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY

El mensaje presidencial, bajo la idea de recoger los estándares indicados por los instrumentos internacionales a los que Chile se comprometió, supone una idea de desigualdad entre ambos sexos, considerando a la mujer como el único ser sujeto a este tipo de agresiones y maltratos. Es necesario, como sociedad hacerse cargo de todos los casos de violencia aplicados contra los ciudadanos sin dejar a nadie fuera de protección.

Algunos datos en materia de violencia intrafamiliar:

### FRECUENCIA ANUAL DE **CASOS POLICIALES** POR DELITOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR A NIVEL PAÍS

Año	VIF a mujeres	VIF a hombres	VIF a no clasificada
2015	95.278	17.887	853
2014	103.708	18.907	823
2013	111.428	19.699	809

### FRECUENCIA ANUAL DE **DENUNCIAS** POR DELITOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR A NIVEL PAÍS

Año	VIF a mujeres	VIF a hombres	VIF a no clasificada
2015	75.391	13.923	853
2014	103.708	18.907	823
2013	87.203	15.367	809

FUENTE: SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO. MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA.

Los datos demuestran que existe un grupo minoritario de hombres que son víctimas de violencia intrafamiliar, pero que es significativo. Por otra parte, la ley sobre violencia intrafamiliar (N°20.066) debería ser suficiente para instar por el cese de todo tipo de violencia dentro de la familia, ya sea contra el hombre o la mujer, los hijos o los adultos mayores.

La violencia es una realidad que abarca a hombres y mujeres, de cualquiera edad. No se debe hacer distinciones ni dar beneficios a un solo grupo de la sociedad, dándole un status privilegiado, pues este tratamiento resulta contrario a la ley y a la Constitución ■■■



# V. COMPARACIÓN DE NORMAS VIGENTES

*Como se señaló, varias disposiciones del proyecto en análisis ya están consideradas por el ordenamiento jurídico siendo innecesario legislar nuevamente sobre aquellas materias. A continuación se hace una comparación entre parte del texto del proyecto de ley y algunas normas vigentes:*

PROYECTO DE LEY BOLETÍN N° 11077-07	NORMAS VIGENTES
<p><b>Artículo 1.- Objeto de la ley.</b></p> <p>Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, cualquiera sea su edad, estado civil, raza, etnia, idioma, religión o creencia, ideología u opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, filiación, situación socioeconómica, orientación sexual, identidad de género, apariencia, condición de salud, de migrante o de refugiada, situación de discapacidad de cualquier tipo o cualquier otra condición. Para ello, regula mecanismos de protección, acceso a la justicia y atención a quienes sean víctimas de ella, a fin de garantizarles el derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.</p>	<p><b>Artículo 19, Constitución Política de la República.-</b></p> <p><i>La Constitución asegura a todas las personas:</i></p> <p><i>1°.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.</i></p> <p><i>La ley protege la vida del que está por nacer.</i></p> <p><i>La pena de muerte sólo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado.</i></p> <p><i>Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo.</i></p> <p><b>Artículo 6, decreto N°1640.-</b> <i>El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y</li> <li>b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.</li> </ul>

PROYECTO DE LEY BOLETÍN N° 11077-07	NORMAS VIGENTES
	<p><b>Artículo 2º, ley N°20.609.-</b> Definición de discriminación arbitraria. Para los efectos de esta ley, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.</p> <p>Las categorías a que se refiere el inciso anterior no podrán invocarse, en ningún caso, para justificar, validar o exculpar situaciones o conductas contrarias a las leyes o al orden público.</p> <p>Se considerarán razonables las distinciones, exclusiones o restricciones que, no obstante fundarse en alguno de los criterios mencionados en el inciso primero, se encuentren justificadas en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental, en especial los referidos en los números 4º, 6º, 11º, 12º, 15º, 16º y 21º <b>del artículo 19 de la Constitución Política de la República</b>, o en otra causa constitucionalmente legítima.</p> <p><b>Artículo 1º, ley N°20.609.-</b> Propósito de la ley. Esta ley tiene por objetivo fundamental instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria.</p>

<b>PROYECTO DE LEY BOLETÍN N° 11077-07</b>	<b>NORMAS VIGENTES</b>
	<p><i>Corresponderá a cada uno de los órganos de la Administración del Estado, dentro del ámbito de su competencia, elaborar e implementar las políticas destinadas a garantizar a toda persona, sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.</i></p>
<p><b>Artículo 7.- Deberes del personal.</b></p> <p>Todos los órganos del Estado velarán porque sus autoridades, funcionarios y funcionarias y personal se abstengan de cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres.</p>	<p><b>Artículo 84, ley N° 18.834.- El funcionario estará afecto a las siguientes prohibiciones:</b></p> <p><i>l) Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido según los términos del artículo 2°, inciso segundo, del Código del Trabajo, y la discriminación arbitraria, según la define el artículo 2° de la ley que establece medidas contra la discriminación.</i></p>
<p><b>Artículo 8.- Deberes de prevención.</b></p> <p>Cuando los órganos del Estado desarrollen políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones, en el marco de sus competencias, promoverán la adopción de las medidas conducentes a la prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito nacional, regional y local, las que deberán estar orientadas hacia la erradicación de ésta y de sus causas.</p> <p>Las medidas que se adopten de conformidad con el inciso anterior podrán incluir, entre otros, los siguientes objetivos:</p>	<p><b>Artículo 1°, Constitución Política de la República.-</b></p> <p><i>Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.</i></p> <p><i>La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.</i></p> <p><i>El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos.</i></p>

<b>PROYECTO DE LEY</b> <b>BOLETÍN N° 11077-07</b>	<b>NORMAS VIGENTES</b>
<p>a) Promover el conocimiento y el respeto de los derechos humanos de las mujeres, incluido especialmente su derecho a una vida libre de violencia, consagrados en las leyes, la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales en esta materia que han sido ratificados por Chile y se encuentran vigentes.</p> <p>b) Promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, procurando eliminar toda forma de discriminación basada en el género.</p> <p>c) Promover la modificación de las condiciones estructurales, sociales y culturales que sostienen, toleran y perpetúan la subordinación y violencia contra las mujeres.</p> <p>d) Promover una cultura ciudadana de denuncia de la violencia contra las mujeres y de total rechazo a ésta.</p> <p>El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género coordinará las acciones necesarias para cumplir con lo dispuesto en este título, de conformidad con el artículo 1 de la ley N°20.820.</p>	<p><i>El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.</i></p> <p><i>Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.</i></p> <p><b>Artículo 19, Constitución Política de la República.-</b></p> <p><i>La Constitución asegura a todas las personas:</i></p> <p><b>2° La igualdad ante la ley.</b> <i>En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias</i></p> <p><b>Artículo 82, ley N° 19.968.- Inicio del procedimiento.</b> <i>El procedimiento por actos de violencia intrafamiliar podrá iniciarse por demanda o por denuncia.</i></p> <p><i>La demanda o denuncia podrá ser deducida por la víctima, sus ascendientes, descendientes, guardadores o personas que la tengan a su cuidado. La denuncia, además, podrá hacerse por cualquier persona que tenga conocimiento directo de los hechos que la motiven, a quien le será aplicable lo establecido en el artículo</i></p>

<b>PROYECTO DE LEY BOLETÍN N° 11077-07</b>	<b>NORMAS VIGENTES</b>
	<p><i>178 del Código Procesal Penal. No obstante, la denuncia de la víctima le otorgará la calidad de parte en el proceso.</i></p>
<p><b>Artículo 11.- Medidas de prevención orientadas a los medios de comunicación.</b></p> <p>El Estado, a través de los órganos competentes, promoverá que los medios de comunicación social respeten y fomenten la protección de la igualdad entre hombres y mujeres. En particular, el Consejo Nacional de Televisión deberá hacerlo de conformidad a lo establecido en el artículo 1 de la ley N° 18.838.</p> <p>Los medios de comunicación social procurarán adoptar las medidas necesarias para que la difusión de informaciones acerca de la violencia contra las mujeres respete, con la correspondiente objetividad informativa, la protección de los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijas e hijos.</p>	<p><b>Artículo 4º, ley 20.066.-</b></p> <p><i>Corresponderá al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género proponer al Presidente de la República las políticas públicas para el cumplimiento de los objetivos de esta ley.</i></p> <p><i>En coordinación y colaboración con los organismos públicos y privados pertinentes formulará anualmente un plan nacional de acción.</i></p> <p><i>Para los efectos de los incisos anteriores, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género tendrá las siguientes funciones:</i></p> <p>c) Promover la contribución de los medios de comunicación para erradicar la violencia contra la mujer y realzar el respeto a su dignidad.</p>
<p><b>Artículo 13.- Deberes en el ámbito de salud.</b></p> <p>El Ministerio de Salud, en el marco de sus competencias, promoverá la adopción de las medidas necesarias para que los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, puedan detectar la existencia de violencia contra las mujeres en el marco de la atención de salud, especialmente en la atención primaria.</p> <p>Igualmente, promoverá la adopción de medidas necesarias para asegurar una atención de parto</p>	<p><b>Artículo 5º ley N° 20.584.-</b></p> <p><i>En su atención de salud, las personas tienen derecho a recibir un trato digno y respetuoso en todo momento y en cualquier circunstancia.</i></p> <p><i>En consecuencia, los prestadores deberán:</i></p> <p>a) <i>Velar porque se utilice un lenguaje adecuado e inteligible durante la atención; cuidar que las personas que adolezcan de alguna discapacidad, no tengan dominio del idioma</i></p>

<p><b>PROYECTO DE LEY</b> <b>BOLETÍN N° 11077-07</b></p>	<p><b>NORMAS VIGENTES</b></p>
<p>humanizada y respetuosa en el cumplimiento del deber de protección establecido en el artículo 139 del decreto con fuerza de ley N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N°2.763, de 1979 y de las leyes N°18.933 y N°18.469, y en las normas de la ley N°20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.</p> <p>Procurará, también, desarrollar las acciones necesarias para responder oportunamente a las situaciones de violencia detectadas. Para estos efectos, podrán establecerse mecanismos coordinados de actuación con los demás órganos estatales dedicados a la protección y atención de la violencia contra las mujeres, incluyendo aquéllos necesarios para la derivación de las afectadas a las instituciones pertinentes y su atención oportuna y efectiva en las mismas.</p> <p>Las personas señaladas en las letras d) del artículo 175 del Código Procesal Penal deberán dar cumplimiento al deber de denuncia en él establecido, y entregar a las mujeres información acerca de las instituciones dedicadas a la protección y atención de la violencia contra las mujeres referidas en el inciso anterior.</p>	<p><i>castellano o sólo lo tengan en forma parcial, puedan recibir la información necesaria y comprensible, por intermedio de un funcionario del establecimiento, si existiere, o con apoyo de un tercero que sea designado por la persona atendida.</i></p> <p>b) <i>Velar porque se adopten actitudes que se ajusten a las normas de cortesía y amabilidad generalmente aceptadas, y porque las personas atendidas sean tratadas y llamadas por su nombre.</i></p> <p>c) <i>Respetar y proteger la vida privada y la honra de la persona durante su atención de salud. En especial, se deberá asegurar estos derechos en relación con la toma de fotografías, grabaciones o filmaciones, cualquiera que sea su fin o uso. En todo caso, para la toma de fotografías, grabaciones o filmaciones para usos o fines periodísticos o publicitarios se requerirá autorización escrita del paciente o de su representante legal.</i></p> <p><i>La atención otorgada por alumnos en establecimientos de carácter docente asistencial, como también en las entidades que han suscrito acuerdos de colaboración con universidades o institutos reconocidos, deberá contar con la supervisión de un médico u otro profesional de la salud que trabaje en dicho establecimiento y que corresponda según el tipo de prestación.</i></p> <p><i>Un reglamento expedido por el Ministerio de Salud establecerá las normas para dar cumplimiento a lo dispuesto en el literal c) y en el inciso precedente ■■■</i></p>

# VI. COMENTARIOS DE MÉRITO EN ESPECÍFICO

*Se abordan a continuación algunos artículos que merecen un comentario en particular.*

## 1.- CLASES DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

El extenso artículo 3º del proyecto, define y distingue cinco clases de violencia contra la mujer :

**“Artículo 3.-** Formas de violencia. La violencia contra las mujeres comprende:

- a) **Violencia física:** cualquier agresión dirigida contra el cuerpo de la mujer y que vulnera, perturba o amenaza la integridad física de la mujer o su derecho a la vida.
- b) **Violencia psicológica:** cualquier acción u omisión que vulnere, perturbe o amenace su integridad psíquica, tales como tratos humillantes o vejatorios, vigilancia, coacción, exigencia de obediencia, explotación, limitación de la libertad ambulatoria de la mujer.
- c) **Violencia sexual:** toda vulneración, perturbación o amenaza al derecho de las mujeres a la libertad sexual y reproductiva o al derecho de las niñas a la indemnidad sexual.

Entre otras manifestaciones, la violencia sexual incluye el acoso sexual, que para los efectos de esta ley corresponde a cualquier comportamiento

no consentido y con connotación sexual, que se puede manifestar en conductas físicas, verbales o no verbales, que se realicen o no en contextos de subordinación, ya sea en el empleo, la educación, la salud, las actividades deportivas y otros ámbitos, tanto en espacios públicos como privados.

- d) **Violencia económica:** toda acción u omisión, intencionada y arbitraria, ejercida en el contexto de relaciones afectivas o familiares, que tenga como efecto directo la vulneración de la autonomía económica de la mujer, que se lleve a cabo con afán de ejercer un control sobre ella y que se manifiesta en un menoscabo injusto de sus recursos económicos o patrimoniales o el de sus hijas o hijos.
- e) **Violencia simbólica:** mensajes, íconos, significados y representaciones que transmiten, reproducen y naturalizan relaciones de subordinación, desigualdad y discriminación de las mujeres en la sociedad”.

Como se observa, bajo esta terminología el proyecto se refiere a actitudes que sí constituyen violencia y a otras que naturalmente no lo son. La violencia supone el ejercicio de la fuerza física y desde este punto de vista, hay violencia en el homicidio, las lesiones y la violación. También se ha reconocido una violencia psicológica que puede manifestarse mediante expresiones injuriosas o que rebajen la dignidad de una persona. Pero se introduciría, ahora, un elemento subjetivo en la violencia, que se potencia aun más cuando se llega a la violencia económica o simbólica.



Por ejemplo, si en una familia el marido ejerciera su calidad de administrador de la sociedad conyugal, supuesto que hubieren pactado esta modalidad, ¿se lo podría acusar de violencia económica si, ante un requerimiento de la mujer, el marido optara por efectuar otro gasto que él juzgara más importante? ¿Qué debe entenderse por autonomía económica de la mujer? Si se pacta sociedad conyugal, la administración ordinaria de la sociedad está en manos del marido. Si se hubiere pactado separación de bienes, en este caso la mujer administra soberanamente sus bienes, así como su peculio profesional, en su caso. De aquí que no se advierte el efecto que se persigue al definir violencia económica.

La violencia simbólica, por otra parte, es un concepto vago que se puede prestar para interpretaciones subjetivas que van a redundar en posibles atribuciones de órganos del Estado. ¿Sería violencia simbólica poner imágenes anunciando los baños de damas y caballeros en un restorán, si las respectivas figuras fueran juzgadas discriminatorias? ¿Quién debería pronunciarse? ¿Podrían los organismos del Estado regular ese tipo de símbolos (que son habitualmente utilizados), para evitar una supuesta violencia contra la mujer? ¿Qué otros símbolos podrían someterse a examen desde el punto de vista de la “violencia simbólica”?

Respecto de la violencia sexual, se trata de un delito desde hace tiempo tipificado en el Código Penal y existe un consenso universal sobre su gravedad, materia que fue revisada hace algunos años, en 1996, cuando se mejoraron varios aspectos de los tipos penales de violación (ley 19.450). Incluso es importante tratar de erradicar estos delitos en la sociedad, por medio de la educación, políticas públicas y, eventualmente, un aumento de penas (sin

perder de vista la necesaria armonización del sistema).

Por otra parte, la ley N° 19.617 del año 1999, penalizó la violación ocurrida al interior del matrimonio, entendiéndola como una agresión que lesiona su libertad personal de la mujer, cuestión que anteriormente había estado solo en el campo de las discusiones doctrinarias. Sin embargo, el proyecto va más allá y construye un solo todo mediante la expresión “libertad sexual y reproductiva”, lo que incide directamente en los derechos reproductivos de la mujer, que ha sido una de las banderas de lucha de la ideología de género. Así, de paso, se sienta una base para proponer, legalmente, el aborto como un derecho reproductivo. Al establecerlo como un derecho, se produce un cambio sustancial en el análisis de esta conducta, pues en principio, nadie puede ser impedido de ejercer un derecho y por lo tanto, abortar estaría incluido en esa calidad. Así una opinión en contra del aborto, proferida en presencia de una mujer, podría ser considerado un caso de violencia reproductiva, lo que resulta una exageración.

## 2.- ATENUANTES DE RESPONSABILIDAD

El artículo 23, titulado Aplicación de atenuante de responsabilidad, establece que “En los procedimientos judiciales señalados en el artículo 19 de esta ley, el juez o jueza no podrá aplicar la atenuante de responsabilidad regulada en el artículo 11 N° 5 del Código Penal cuando



ésta se funde en estereotipos que amporen o refuercen la violencia contra las mujeres”. La atenuante vigente se configura cuando el hechor hubiere obrado “por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato y obsecación” [una persona obcecada equivale a una persona enceguecida].

Los delitos señalados en el artículo 19 del proyecto, respecto de los que se prohíbe la referida atenuante, son todos los comprendidos en el ámbito de aplicación del proyecto de ley: hechos de violencia intrafamiliar no constitutivos de delito regulados por la ley N°20.66; el maltrato habitual contemplado en el artículo 14 de la misma ley, siempre que la víctima sea una mujer; diversos delitos del Código Penal ocurridos en el contexto de violencia intrafamiliar; el delito de femicidio, que es el parricidio cuando la víctima es la cónyuge o conviviente.

Ahora bien, ¿qué debemos entender por “estereotipos” que amporen o refuercen la violencia contra las mujeres? Esta es la circunstancia que anularía la atenuante. Se trata de un concepto muy amplio y subjetivo que quedará a discrecionalidad del juez. Supóngase el siguiente caso: el marido sorprende a su mujer en flagrante adulterio y la agrede o mata. Razonablemente podría resultar beneficiado con la atenuante del N°5 del artículo 11, dada la conmoción psicológica que debió provocar esa escena. Recuérdese que hasta el año 1953 existía una eximente de responsabilidad para esta situación, la que fue derogada. Si bien la derogación resulta correcta, parece excesivo ahora eliminar incluso la posibilidad de invocar la atenuante, suponiendo que sea ésta la intención del proyecto de ley. Dada la formulación de la norma, que se ha transcrito, resulta difícil saberlo.

### 3.- LA NO CONVIVENCIA

El artículo 28 del proyecto, plantea incluir dentro del concepto de violencia intrafamiliar, aquellas agresiones cometidas dentro del noviazgo o del llamado “pololeo”, sin existir una relación de convivencia o concubinato.

Dicho artículo 28 modifica la ley N° 20.066, que Establece ley de violencia intrafamiliar, sustituyendo el inciso primero de su artículo 5° por el siguiente:

“Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida, la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad sexual, o la subsistencia o autonomía económica de la persona que tenga o haya tenido la calidad de cónyuge o conviviente civil o de hecho de quien agrede, sea del mismo o de diferente sexo, o que sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, de quien agrede o de su cónyuge o de su actual conviviente.”.

Además modifica el inciso segundo, que quedaría con la siguiente redacción:

También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente ocurra entre los padres de un hijo común, o recaiga sobre persona menor de edad, adulto mayor o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar, o tenga lugar entre personas que tienen o han tenido una relación de pareja con o sin convivencia (la parte subrayada es la que agrega el proyecto de ley).

Pues bien, ¿qué se entiende por una relación de pareja sin convivencia? No existen formalidades

que permitan objetivamente determinar si dos personas son o no una pareja sin convivencia. Si, en cambio, son convivientes, aunque tampoco es un hecho formal (salvo el acuerdo de unión civil), la ley ya considera esta circunstancia incluso para el femicidio (artículo 390 del Código Penal), cuestión que también podría presentar problemas de determinación de esa circunstancia. Pero una relación de pareja sin convivencia vendría a ser un caso de “pololeo”, que parece exagerado incluirlo dentro de los parámetros de violencia intrafamiliar contra la mujer. Si un varón injuria, lesiona o da muerte a su polola, debe ser sancionado conforme a las normas generales.

Adicionalmente a la violencia intrafamiliar, el proyecto incursiona en el parricidio (que, en este caso, consiste en dar muerte al cónyuge o conviviente civil; llamado femicidio si la víctima es la mujer), y agrega también dentro de esta grave figura penal a quienes hubieren tenido una relación de pareja sin convivencia.

Ahora bien, consagrar como femicidio el crimen cometido contra la persona con quien se tiene o tuvo una relación de pareja sin convivencia es equivocado, ya que no se logra comprender a qué conducta exactamente se refiere la norma.

Por el principio de legalidad, la ley penal debe referirse expresamente a hechos objetivos, con una descripción concreta sobre las acciones humanas que se van a castigar, sin dar simples criterios de punibilidad. La Constitución establece en el inciso final, del numeral 3, del artículo 19 que “ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté especialmente descrita en ella”. Por tal razón, los delitos consagrados por la ley deben ser siempre específicos, deber que no se cumple en

la redacción del nuevo artículo que se pretende consagrar. Sin embargo, de tratarse de una relación de noviazgo surge la duda: ¿cómo se va a probar que la tienen? Cualquier imagen, fotografía, carta, no puede igualarse al contrato nacido de la aceptación del vínculo matrimonial o de la convivencia civil.

Por tales razones, el uso de la frase “tiene o ha tenido una relación de pareja sin convivencia” puede tener una reacción exagerada de parte de los familiares de mujeres asesinadas por personas que tienen o han tenido relaciones de diversos tipos, sin corresponder a una relación afectiva.

Lo anterior no significa la impunidad para el agresor, solo que será juzgado por homicidio y no por parricidio, que tiene una pena más grave.

#### 4.- ACTUACIÓN DE OFICIO DEL JUEZ

El artículo 29 del proyecto de ley, modificando la ley 19.968 sobre tribunales de familia, establece en el inciso tercero del artículo 21 de dicha ley que “En las causas sobre violencia intrafamiliar, de verificarse las circunstancias previstas en el inciso primero [abandono del procedimiento por no comparecencia de las partes], el juez o jueza citará a las partes, en forma inmediata, a una nueva audiencia. Si a ésta no concurriere ninguna de las partes, el juez o jueza ordenará el archivo provisional de los antecedentes,

pudiendo el denunciante o demandante solicitar, en cualquier momento, la reapertura del procedimiento. Transcurridos un año desde que se decreta el archivo provisional sin haberse requerido la reanudación del procedimiento, se declarará, de oficio o a petición de parte, el abandono del procedimiento, debiendo el juez dejar sin efecto las medidas cautelares que haya fijado” (se subraya la modificación).

Es discutible que el juez pueda, por sobre la voluntad de las partes de no concurrir a la audiencia, insistir en su celebración. El denominado principio oficial, que obliga al órgano jurisdiccional a desplegar iniciativa para el establecimiento de los hechos y llevar adelante la investigación, es pertinente en materia penal; no así en materias que deben asimilarse a la justicia civil, donde rige el principio dispositivo de instancia de parte, ya que son éstas las llamadas a ir provocando la actuación del tribunal. Es así que la modificación que se propone, supone asimilar a la justicia penal una institución de los tribunales de familia que está concebida para una situación de conflicto que no es penal, como es la violencia intrafamiliar.

Sobre todo existe una razón práctica para dar por abandonado el procedimiento cuando las partes no comparecen a la audiencia, y es que podrían haberse reconciliado y por lo mismo, perderían interés en la prosecución del juicio. Siempre la reconciliación será un mejor resultado que la dictación de la sentencia. Por esa razón, la norma que se viene introduciendo y que obliga al juez (“o jueza”) a citar nuevamente a las partes, significa una imposición del órgano jurisdiccional del Estado por sobre la voluntad de las personas.

Si se tratare del caso en que la mujer teme ir a la audiencia, una segunda citación no soluciona el problema.

## 5.- DIFUSIÓN DE IMÁGENES SIN AUTORIZACIÓN

Se agregaría un nuevo **artículo 161 C** al Código Penal para sancionar la difusión de imágenes íntimas que se hubieren obtenido con consentimiento de la persona afectada, sin obtener su consentimiento para difundirlas<sup>3</sup>.

Esta norma tiene sentido ya que se han observado casos que vulneran la intimidad de una persona al difundirse fotografías u otros elementos, que no se hubieran registrado para su difusión. Es más grave, como propone el proyecto, si en la difusión se incluyen datos personales, tales como el nombre, domicilio, lugar de trabajo, etcétera. Se trata de un delito que protege la intimidad de cualquier persona, sea hombre o mujer, y de cualquiera edad.

3 Artículo 30.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Penal:

1) Agrégase el siguiente artículo 161-C, nuevo:

“Artículo 161-C.- Será sancionado con multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales, el que, sin la autorización de la persona afectada, difunda por cualquier medio, sea físico o electrónico, imágenes o videos de una persona mayor de 18 años, que hubiere obtenido con su anuencia en un recinto particular o en lugares que no sean de libre acceso al público, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad de esa persona.

Si la difusión de las imágenes o videos señalados en el inciso primero incluye o se acompaña de información personal de la víctima tal como su nombre, domicilio, lugar de trabajo o estudio o cualquier otro dato de carácter personal, se impondrá la pena de multa de quince a veinte unidades tributarias mensuales.

Las sanciones de los incisos precedentes se aplicarán tanto a la persona que realice la publicación o difusión del material, como a quien haya suministrado a éste las imágenes o videos.”.

## 6.- PÉRDIDA DE DERECHOS PREVISIONALES

El proyecto, en su afán de imponer la ideología de género, que lo inspira, en todos los ámbitos posibles, llega al extremo de chocar con el texto constitucional, al disponer que “No tendrá la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivencia quien, perteneciendo al grupo familiar mencionado en el inciso primero, haya sido condenado o condenada por el homicidio o femicidio del o la causante”. Para ello modifica el artículo 5° del decreto ley 3.500.

Como se sabe, el artículo 19 N°7, letra h ) de la Constitución establece que “no podrá aplicarse como sanción la pérdida de los derechos previsionales”. Si se produce homicidio, parricidio o femicidio de la persona que está afiliada a una Administradora de Fondos de Pensiones, y si el homicida, parricida o femicida tiene derecho a una prestación previsional en virtud de un vínculo con la víctima, será juzgado y condenado a la pena que en derecho corresponda, que puede llegar a presidio perpetuo calificado. Lo que no podrá hacer el tribunal, es privarlo de los derechos que le corresponden en el sistema previsional, porque lo prohíbe expresamente la Constitución. Esa pensión la recibirá en el establecimiento penitenciario en que esté cumpliendo condena y le servirá para las necesidades que en esa condición pueda solventar.

## 7.- LOS ESTEREOTIPOS

Adicionalmente a lo que ya se señaló en el punto 2 sobre atenuante de responsabilidad,

existen otros preceptos que utilizan la expresión “estereotipo” para determinar su significado y alcance; son los artículos 9°, letra b); 20, letra b); 23 –ya comentado- y 26, letra a). El diccionario de la RAE entiende por estereotipo “imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo de sociedad con carácter inmutable”. Este concepto se introduce en las siguiente figuras legales:

- a.- Medidas de prevención que se podrán adoptar por las autoridades, especialmente en la incorporación de programas de formación o capacitación de contenidos orientados a modificar los patrones de conducta sociales y culturales discriminatorios y los estereotipos de género que generan violencia contra las mujeres;
- b.- En materia de prevención de la victimización secundaria, concepto este último bastante amplio y que incluye diversas medidas, se establece que se procurará “evitar o disminuir cualquier perturbación que hubieren de soportar con ocasión de sus actuaciones en el sistema de justicia u otros servicios públicos o los tratos fundados en estereotipos que amparen o refuercen la violencia contra las mujeres.
- c.- Dentro del ámbito de aplicación de la ley, se dan reglas especiales para casos de violencia sexual, disponiéndose que las conductas sexuales pasadas de la víctima no podrán ser objeto de discusión en el proceso, salvo cuando el tribunal lo estime estrictamente indispensable para la resolución del mismo. Cuando esta circunstancia proceda, el tribunal procurará considerarlas sin reproducir estereotipos discriminatorios contra las mujeres.

No es fácil determinar qué efectos produce la remisión a los estereotipos de género, que amporen o refuercen la violencia contra la mujer, en el contexto de las medidas de prevención o de judicialización a que dará lugar la violencia. Es un aspecto que se deberá clarificar durante la tramitación legislativa.

## 8.- PARRICIDIO Y FEMICIDIO.

Actualmente (y en relación a lo que interesa para el proyecto de ley) el parricidio lo comete el que da muerte a quien es o ha sido su cónyuge o conviviente. Si la víctima es la mujer, no se denomina parricidio sino femicidio. El proyecto incluye al conviviente civil (lo que es correcto), pero en cuanto al femicidio incorpora a la víctima que tiene o ha tenido una relación de pareja sin convivencia con el autor del delito.

Lo anterior no parece ser una modificación meramente nominal, como la del femicidio propiamente tal, que no alteró el tipo penal del parricidio. Ésta sí se va a producir un efecto en relación a las atribuciones del Servicio Nacional de la Mujer y de Equidad de Género, que quedaría facultado para deducir querrela por femicidio, lo que alcanza al homicidio cometido contra la conviviente que ha tenido o no una relación de pareja con o sin convivencia.

Desde luego, esta última hipótesis queda comprendida dentro del homicidio, porque no se configuran los presupuestos legales del parricidio entre cónyuges; pero se le da atribuciones al Servicio para intervenir judicialmente, lo que supone superponerse a las actividades del Ministerio Público duplicando la utilización de recursos fiscales.

Además, existe la posibilidad de que se entienda también modificado el tipo penal del parricidio, en estricto sentido. En efecto, ahora se denominará femicidio ya no solo al caso en que la víctima del parricidio propiamente tal es la mujer, sino que se extiende a otra figura penal que también podría tener el mismo carácter, ya que se incluye al no conviviente en el mismo artículo 390 del Código Penal, que se modifica por el artículo 30 N°4 del proyecto de ley.

## 9.- REFERENCIA LEGALES QUE INTRODUCE EL PROYECTO.

Como se ha señalado anteriormente, el proyecto de ley en examen se remite repetidamente a otros textos legales, con el objeto de hacer aplicables normas vigentes (algunas de las cuales viene modificando) a la perspectiva de género y a la nueva nomenclatura que se introduce. Entre estos términos se insiste en el vocablo “estereotipo” que se repite en los artículos 9°, 20, 23, 26,

y cuyo alcance se debería precisar en el contexto del proyecto.

El proyecto se remite a los siguientes cuerpos legales vigentes a lo largo de su aticulado: ley 20.820 sobre Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género, ley 20.911 sobre plan de formación ciudadana, ley 18.838 sobre consejo Nacional de Televisión, decreto ley 2.762 de 1979, ley 18.933 sobre Superintendencia de Instituciones de Salud Previsional, ley 18.469 sobre SERNAC y derechos de los consumidores, ley 20.584 sobre derechos y deberes de la personas relacionadas con las prestaciones de salud, decreto ley 2.460 sobre Policía de Investigaciones, ley 19.968 sobre tribunales de familia, ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar, Código Penal, Código Procesal Penal, ley 19.640 Orgánica Constitucional del Ministerio Público y decreto ley 3.500 sobre sistema previsional.

Algunos de los cuerpos legales mencionados vienen siendo modificados, como es el caso de la ley sobre violencia intrafamiliar, a cuyo artículo 2 se le introduce un nuevo inciso, que se transcribe por su trascendencia en relación con los ámbitos de la vida privada de las personas. Es del siguiente tenor:

“Corresponderá especialmente a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, en el ámbito de sus

competencias, integrar en forma transversal en su actuar los objetivos de prevención, sanción y erradicación de todas las formas y manifestaciones de la violencia que se ejerce dentro del espacio doméstico, de las familias y de las relaciones de pareja”.

El peligro de intromisión en la vida privada de las personas, incluso sin su consentimiento, resulta de su sola lectura.

## 10.- GASTO FISCAL.

El costo fiscal anual del proyecto se estima, según el Informe Financiero de la Subdirección de Presupuesto, en la cantidad de \$2.353.207.000, que se financiarán en su primer año de aplicación, con cargo a los presupuestos de los Ministerios de la Mujer y de Equidad de Género y de Salud, y con cargo al presupuesto del Ministerio Público. En los años siguientes se financiará con cargo a la ley de presupuestos de la Nación.

Ello se explica por el aumento anual de 22 mil casos de población femenina en programas de violencia en la red nacional de salud; acompañamiento a víctimas de violencia y seguimiento de casos, y atención de víctimas en general (contact center y otros) ■■■



# VII. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY

## “TÍTULO I

### OBJETO DE LA LEY Y DEFINICIONES GENERALES

**Artículo 1.- Objeto de la ley.** Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, cualquiera sea su edad, estado civil, raza, etnia, idioma, religión o creencia, ideología u opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, filiación, situación socioeconómica, orientación sexual, identidad de género, apariencia, condición de salud, de migrante o de refugiada, situación de discapacidad de cualquier tipo o cualquier otra condición. Para ello, regula mecanismos de protección, acceso a la justicia y atención a quienes sean víctimas de ella, a fin de garantizarles el derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

**Artículo 2.- Definición de violencia contra las mujeres.** La violencia contra las mujeres comprende cualquier acción u omisión, sea que tenga lugar en el ámbito público o en el privado, basada en el género y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres, que cause o pueda causar muerte, menoscabo físico, sexual, psicológico, económico o de otra clase a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarlas.

**Artículo 3.- Formas de violencia.** La violencia contra las mujeres comprende:

- a) **Violencia física:** cualquier agresión dirigida contra el cuerpo de la mujer y que vulnera, perturba o amenaza la integridad física de la mujer o su derecho a la vida.
- b) **Violencia psicológica:** cualquier acción u omisión que vulnere, perturbe o amenace su integridad psíquica, tales como tratos humillantes o vejatorios, vigilancia, coacción, exigencia de obediencia, explotación, limitación de la libertad ambulatoria de la mujer.
- c) **Violencia sexual:** toda vulneración, perturbación o amenaza al derecho de las mujeres a la libertad sexual y reproductiva o al derecho de las niñas a la indemnidad sexual.

Entre otras manifestaciones, la violencia sexual incluye el acoso sexual, que para los efectos de esta ley corresponde a cualquier comportamiento no consentido y con connotación sexual, que se puede manifestar en conductas físicas, verbales o no verbales, que se realicen o no en contextos de subordinación, ya sea en el empleo, la educación, la salud, las actividades deportivas y otros ámbitos, tanto en espacios públicos como privados.

- d) **Violencia económica:** toda acción u omisión, intencionada y arbitraria, ejercida en el contexto de relaciones afectivas o familiares, que tenga como efecto directo la vulneración de la autonomía económica de la mujer, que se lleve a cabo con afán de ejercer un control sobre ella y que se manifiesta en un menoscabo injusto de sus recursos económicos o patrimoniales o el de sus hijas o hijos.

- e) **Violencia simbólica:** mensajes, íconos, significados y representaciones que transmiten, reproducen y naturalizan relaciones de subordinación, desigualdad y discriminación de las mujeres en la sociedad.

#### **Artículo 4.- Ámbitos en que se ejerce la violencia contra las mujeres.**

- a) **Violencia en el ámbito privado:** Se refiere a las formas de violencia que tienen lugar dentro de la familia, así como la que tiene lugar en cualquier otra relación íntima o de pareja, aunque no exista ni haya existido convivencia entre la víctima y la persona que agrede.
- b) **Violencia en el ámbito público:** Se refiere a la violencia contra las mujeres que es perpetrada por cualquier persona cuya relación no esté comprendida en el ámbito privado. Ésta comprende, entre otras, aquella que tiene lugar en los establecimientos educacionales y de salud, el lugar de trabajo y los espacios públicos; la que es perpetrada o tolerada por el Estado o sus empleadas y empleados públicos donde quiera que ésta ocurra, ya sea en períodos de normalidad o de excepción constitucional, y particularmente aquella que tiene lugar bajo control o custodia estatal.

**Artículo 5.- Deberes de los órganos del Estado.** Cuando los órganos del Estado desarrollen políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones, en el marco de sus competencias, propenderán a la adopción de las medidas apropiadas para dar cumplimiento a los objetivos y disposiciones de esta ley. En este marco, deberá tenerse en especial consideración lo dispuesto en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y en los demás tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, inciso segundo<sup>4</sup>, y 3<sup>5</sup>

4 Artículo 1º.- Créase el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en adelante "el Ministerio", como la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente o Presidenta de la República en el diseño, coordinación y evaluación de las políticas, planes y programas destinados a promover la equidad de género, la igualdad de derechos y de procurar la eliminación de toda forma de discriminación arbitraria en contra de las mujeres.

El Ministerio, actuando como órgano rector, velará por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materia de equidad de género, los que deberán incorporarse en forma transversal en la actuación del Estado.

La equidad de género comprende el trato idéntico o diferenciado entre hombres y mujeres que resulta en una total ausencia de cualquier forma de discriminación arbitraria contra las mujeres por ser tales, en lo que respecta al goce y ejercicio de todos sus derechos humanos.

5 Artículo 3º.- El Ministerio tendrá, en especial, las siguientes funciones y atribuciones:

- a) Proponer al Presidente o Presidenta de la República políticas, normas, planes y programas orientados a la equidad de género, a la igualdad de derechos y a procurar eliminar toda forma de discriminación arbitraria contra las mujeres, coordinarlos y velar por su implementación, a fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos y evaluar su aplicación transversal en la actuación del Estado. Además, le corresponderá la formulación, coordinación y evaluación de un Plan Nacional de Igualdad entre hombres y mujeres.
- b) Proponer al Presidente o Presidenta de la República iniciativas legales, reglamentarias y administrativas en las materias de su competencia y evaluar su aplicación. Las proposiciones e implementaciones que efectúe el Ministerio tendrán pertinencia cultural, reconocerán la diversidad de las mujeres y deberán asegurar el pleno desarrollo y autonomía de las mujeres y la mejora de su posición a fin de garantizarles el goce de sus derechos en igualdad de condiciones y oportunidades con los hombres, su plena participación en la vida laboral, social, económica y cultural del país, y en los cargos de elección popular y funciones públicas. A su vez, el Ministerio promoverá la protección de la maternidad, reconociendo la diversidad de las mujeres y sus diferentes opciones de vida.
- c) Desarrollar políticas, planes y programas destinados a atender, prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, generando los espacios de coordinación entre los organismos de la Administración del Estado a nivel nacional, regional y local.
- d) Promover la igualdad de derechos y obligaciones entre los hombres y las mujeres en las relaciones familiares, así como el reconocimiento de la responsabilidad común en cuanto a la educación, el cuidado y el desarrollo integral de los hijos e hijas. En el marco de la corresponsabilidad, la educación incluirá una comprensión adecuada de la maternidad como una función social.
- e) Impulsar, coordinar y evaluar la incorporación de la perspectiva de género en las políticas y planes de los diversos ministerios y servicios a nivel nacional y regional.



de la ley N° 20.820, que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y modifica normas legales que indica, y dentro del marco de sus competencias, velará por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materias de violencia contra las mujeres.

**Artículo 6.- Deberes particulares del Estado.** Corresponderá especialmente a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, promover dentro del ámbito de sus respectivas competencias, medidas tendientes a la protección de los derechos de las mujeres, incorporar la perspectiva de género, prevenir la violencia contra las mujeres y otorgar una respuesta dentro del ámbito de sus competencias frente a su ocurrencia o al riesgo de padecerla, de conformidad con esta ley o de la normativa que le sea aplicable.

Los Ministerios referidos en el inciso anterior procurarán, dentro del marco de sus competencias, brindar protección a las mujeres víctimas de violencia.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género entregará orientaciones y directrices para el desarrollo de capacitaciones, sobre violencia contra las mujeres de conformidad a lo establecido en la letra c) del artículo 3° de la ley N° 20.820. El Poder Judicial, el Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile y la Corporación de Asistencia Judicial considerarán dichas orientaciones en las capacitaciones para sus autoridades y personal vinculado a la atención de las víctimas.

**Artículo 7.- Deberes del personal.** Todos los órganos del Estado velarán porque sus autoridades, funcionarios y funcionarias y personal se abstengan de cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres.

- 
- f) Velar por la transformación de estereotipos, prejuicios y prácticas sociales y culturales, entre otros, los basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos y que naturalizan y reproducen la discriminación arbitraria contra las mujeres.
  - g) Velar por el cumplimiento de los tratados internacionales sobre derechos humanos de las mujeres y la equidad de género, ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, especialmente aquellos que guarden relación con la eliminación de todas las formas de discriminación arbitraria y de violencia contra las mujeres.
  - h) Mantener vínculos de cooperación con organismos internacionales dedicados a los derechos humanos de las mujeres y la equidad de género, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan al Ministerio de Relaciones Exteriores.
  - i) Colaborar con organismos del sector público, a nivel nacional, regional y local, y asesorarlos en la formulación e incorporación de criterios de género en sus políticas y programas, evaluaciones y procesos de planificación.
  - j) Celebrar convenios de colaboración y cooperación con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, para el cumplimiento de sus fines.
  - k) Establecer y administrar un sistema de información pública sobre el cumplimiento y aplicación de la normativa vigente sobre equidad de género.
  - l) Desarrollar estudios e investigaciones necesarios para el cumplimiento de su objeto. Para tal efecto, estará facultado para solicitar a los órganos de la Administración del Estado la información disponible que requiera para el cumplimiento de sus funciones.
  - m) Realizar procesos de capacitación a los funcionarios públicos y funcionarias públicas en materias relacionadas con las funciones encomendadas al Ministerio, los que también podrán otorgarse a particulares.
  - n) Mantener un diagnóstico de indicadores de género y velar por su incorporación en la planificación del desarrollo social y económico, y en la Administración del Estado.
  - ñ) Elaborar anualmente informes sobre la situación de las mujeres, el ejercicio de sus derechos humanos y de la equidad de género a nivel nacional, regional y local.
  - o) Colaborar con las autoridades competentes a nivel nacional, regional y local en la preparación, aprobación y desarrollo de programas de educación, promoción y difusión de las políticas de género, orientados a la creación de una conciencia y cultura nacional sobre la equidad de género y a promover la participación ciudadana responsable en estas materias.
  - p) Promover la dignificación del trabajo doméstico, en el marco de la corresponsabilidad entre hombres y mujeres.
  - q) Fomentar medidas en favor de las mujeres que reconozcan y resguarden la multiculturalidad y las identidades étnicas, respetando sus propias visiones, prácticas, necesidades y creencias, en armonía con los derechos humanos.
  - r) Realizar las demás funciones y atribuciones que la ley le encomiende.

6 Véase nota al artículo 5°, inciso segundo.

## TÍTULO II

### DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

**Artículo 8.- Deberes de prevención.** Cuando los órganos del Estado desarrollen políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones, en el marco de sus competencias, promoverán la adopción de las medidas conducentes a la prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito nacional, regional y local, las que deberán estar orientadas hacia la erradicación de ésta y de sus causas.

Las medidas que se adopten de conformidad con el inciso anterior podrán incluir, entre otros, los siguientes objetivos:

- e) Promover el conocimiento y el respeto de los derechos humanos de las mujeres, incluido especialmente su derecho a una vida libre de violencia, consagrados en las leyes, la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales en esta materia que han sido ratificados por Chile y se encuentran vigentes.
- f) Promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, procurando eliminar toda forma de discriminación basada en el género.
- g) Promover la modificación de las condiciones estructurales, sociales y culturales que sostienen, toleran y perpetúan la subordinación y violencia contra las mujeres.
- h) Promover una cultura ciudadana de denuncia de la violencia contra las mujeres y de total rechazo a ésta.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género coordinará las acciones necesarias para cumplir con lo dispuesto en este título, de conformidad con el artículo 17 de la ley N° 20.820.

**Artículo 9.- Medidas de prevención.** Las medidas que se adopten de conformidad con el deber de prevención podrán incluir, entre otras:

- a) Actividades y campañas de difusión y sensibilización sobre los derechos humanos de las mujeres, su derecho a una vida libre de violencia y la igualdad entre hombres y mujeres.
- b) La incorporación en los programas de formación o capacitación de contenidos orientados a modificar los patrones de conducta sociales y culturales discriminatorios y los estereotipos de género que generan violencia contra las mujeres.
- c) La sensibilización de los medios de comunicación con el fin de promover una cultura ciudadana de denuncia de la violencia contra las mujeres y de total rechazo a ésta.

Estas actividades serán particularmente relevantes en los ámbitos de salud, educación, justicia y seguridad ciudadana.

7 Véase nota al artículo 5°, inciso segundo.

**Artículo 10.- Medidas en el ámbito de la educación.** El Ministerio de Educación velará por la promoción de los principios de igualdad y no discriminación arbitraria, y la prevención de la violencia en todas sus formas, incorporando la perspectiva de género en la formación docente y en las orientaciones que entregue al sistema educativo en todos sus niveles.

Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover la igualdad entre hombres y mujeres y prevenir la violencia contra la mujer en todas sus formas. Asimismo, en el marco de las acciones sobre convivencia escolar promoverán una cultura de resolución pacífica de conflictos.

Los Planes de Formación Ciudadana, regulados por la ley N° 20.911<sup>8</sup>, deberán incluir dentro de sus objetivos la promoción del principio de igualdad entre hombres y mujeres, la prohibición de cualquier tipo de discriminación y el derecho de todas las personas, en particular las mujeres y las niñas, a una vida libre de violencia, considerando además la perspectiva de género.

**Artículo 11.- Medidas de prevención orientadas a los medios de comunicación.** El Estado, a través de los órganos competentes, promoverá que los medios de comunicación social respeten y fomenten la protección de la igualdad entre hombres y mujeres. En particular, el Consejo Nacional de Televisión deberá hacerlo de conformidad a lo establecido en el artículo 1° de la ley N° 18.838<sup>10</sup>.

Los medios de comunicación social procurarán adoptar las medidas necesarias para que la difusión de informaciones acerca de la violencia contra las mujeres respete, con la correspondiente objetividad informativa, la protección de los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijas e hijos.

8 CREA EL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES RECONOCIDOS POR EL ESTADO.

9 Artículo 1°.- El Consejo Nacional de Televisión, en adelante "el Consejo", es la institución autónoma de rango constitucional creada por el inciso sexto del numeral 12 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, cuya misión es velar por el correcto funcionamiento de todos los servicios de televisión que operan, u operen a futuro, en el territorio nacional. Estará dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio, y se relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Al Consejo Nacional de Televisión no le serán aplicables las normas generales o especiales, dictadas o que se dicten para regular a la Administración del Estado, tanto centralizada como descentralizada, salvo lo dispuesto en el decreto ley N° 1.263, de 1975, y en la ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285, y en el Título VI de la presente ley.

Para los efectos de velar por el correcto funcionamiento de los servicios de televisión, tendrá su supervigilancia y fiscalización, en cuanto al contenido de las emisiones que a través de ellos se efectúen, salvo en las materias técnicas normadas y supervisadas por la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

Se entenderá por correcto funcionamiento de estos servicios el permanente respeto, a través de su programación, de la democracia, la paz, el pluralismo, el desarrollo regional, el medio ambiente, la familia, la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud, los pueblos originarios, la dignidad humana y su expresión en la igualdad de derechos y trato entre hombres y mujeres, así como el de todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Para efectos de esta ley, se entenderá por pluralismo el respeto a la diversidad social, cultural, étnica, política, religiosa, de género, de orientación sexual e identidad de género, siendo deber de los concesionarios y permisionarios de servicios de televisión, regulados por esta ley, la observancia de estos principios.

Asimismo, se entenderá que el correcto funcionamiento de esos servicios comprende el acceso público a su propuesta programática y que en la difusión de ella, en la forma y de la manera que cada concesionario determine, se cautelen los derechos y principios a que hacen referencia los incisos anteriores.

De igual manera, el correcto funcionamiento de estos servicios comprende el cabal cumplimiento, por parte de los concesionarios y permisionarios, de las leyes Nos 17.336, 20.243 y del Capítulo IV, del Título II del Libro I, del Código del Trabajo.

También se podrá considerar correcto funcionamiento, entre otras cosas, la incorporación de facilidades de acceso a las transmisiones para personas con necesidades físicas especiales, la transmisión de campañas de utilidad pública a que hace referencia la letra m) del artículo 12, y la difusión de programación de carácter educativo, cultural o de interés nacional.

10 CREA EL CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN.

## TÍTULO III

### DE LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS MUJERES FRENTE A LA VIOLENCIA

**Artículo 12.- Deberes de protección.** Cuando los órganos del Estado desarrollen políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones, en el marco de sus competencias, adoptarán las medidas conducentes a la protección de las mujeres frente a la violencia, particularmente, cuando existan hechos anteriores de esta naturaleza, riesgo de volver a sufrir violencia o amenazas.

Las medidas que se adopten para la protección de las mujeres frente a la violencia deberán estar orientadas a la garantía de su derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad y a la seguridad personal.

**Artículo 13.- Deberes en el ámbito de salud.** El Ministerio de Salud, en el marco de sus competencias, promoverá la adopción de las medidas necesarias para que los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, puedan detectar la existencia de violencia contra las mujeres en el marco de la atención de salud, especialmente en la atención primaria.

Igualmente, promoverá la adopción de medidas necesarias para asegurar una atención de parto humanizada y respetuosa en el cumplimiento del deber de protección establecido en el artículo 139<sup>11</sup> del decreto con fuerza de ley N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, y en las normas de la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.

Procurará, también, desarrollar las acciones necesarias para responder oportunamente a las situaciones de violencia detectadas. Para estos efectos, podrán establecerse mecanismos coordinados de actuación con los demás órganos estatales dedicados a la protección y atención de la violencia contra las mujeres, incluyendo aquéllos necesarios para la derivación de las afectadas a las instituciones pertinentes y su atención oportuna y efectiva en las mismas.

Las personas señaladas en las letras d) del artículo 175<sup>12</sup> del Código Procesal Penal deberán dar cumplimiento al deber de denuncia en él establecido, y entregar a las mujeres información acerca de las instituciones dedicadas a la protección y atención de la violencia contra las mujeres referidas en el inciso anterior.

**Artículo 14.- Deberes en el ámbito de la educación.** El Ministerio de Educación, en el ámbito de sus competencias, pudiendo además actuar en cooperación con otras instituciones públicas y privadas, promoverá la adopción de las medidas necesarias para que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, puedan detectar las situaciones de violencia que afecten a los miembros de su comunidad educativa.

11 Artículo 139.- Toda mujer embarazada tendrá derecho a protección del Estado durante el embarazo y hasta el sexto mes del nacimiento del hijo, la que comprenderá el control del embarazo y puerperio. El niño recién nacido y hasta los seis años de edad tendrá también derecho a la protección y control de salud del Estado. La atención del parto estará incluida en la asistencia médica a que se refiere la letra b) del artículo 138.

12 Artículo 175.- Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar:

d) Los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares y, en general, los profesionales en medicina, odontología, química, farmacia y de otras ramas relacionadas con la conservación o el restablecimiento de la salud, y los que ejercieren prestaciones auxiliares de ellas, que notaren en una persona o en un cadáver señales de envenenamiento o de otro delito

El Ministerio de Educación procurará desarrollar las acciones necesarias para responder oportunamente a las situaciones de violencia detectadas. Para esto podrá establecer mecanismos coordinados de actuación con los demás órganos estatales dedicados a la protección y atención de la violencia contra las mujeres, incluyendo aquéllos necesarios para la derivación de las afectadas a las instituciones pertinentes y su atención oportuna y efectiva en las mismas.

Las personas señaladas en la letra e) del artículo 175<sup>13</sup> del Código Procesal Penal deberán dar cumplimiento al deber de denuncia en él establecido, y entregar a las mujeres información acerca de las instituciones dedicadas a la protección y atención de la violencia contra las mujeres referidas en el inciso anterior.

**Artículo 15.- Medidas de protección.** Para efectos de la protección de las mujeres frente a la violencia, los siguientes órganos del Estado, en el marco de sus competencias, procurarán adoptar las siguientes medidas:

- a) Los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Justicia y Derechos Humanos y de Salud promoverán la implementación de servicios de apoyo para asistir a las mujeres víctimas de violencia y a las personas que se encuentren bajo su cuidado.
- b) Los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género y de Justicia y Derechos Humanos promoverán políticas para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia.

**Artículo 16.- Deberes de protección en el ámbito de la seguridad.** El Ministerio Público, los Tribunales de Justicia, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la debida protección de las mujeres víctimas de violencia, actuando dentro de sus respectivas competencias, conforme a lo dispuesto en el artículo 78<sup>14</sup> del Código Procesal Penal, artículos 1<sup>15</sup>, 3<sup>16</sup>

13 e) Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento.

14 Artículo 78.- Información y protección a las víctimas. Será deber de los fiscales durante todo el procedimiento adoptar medidas, o solicitarlas, en su caso, para proteger a las víctimas de los delitos; facilitar su intervención en el mismo y evitar o disminuir al mínimo cualquier perturbación que hubieren de soportar con ocasión de los trámites en que debieren intervenir.

Los fiscales estarán obligados a realizar, entre otras, las siguientes actividades a favor de la víctima:

- a) Entregarle información acerca del curso y resultado del procedimiento, de sus derechos y de las actividades que debiere realizar para ejercerlos.
  - b) Ordenar por sí mismos o solicitar al tribunal, en su caso, las medidas destinadas a la protección de la víctima y su familia frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados.
  - c) Informarle sobre su eventual derecho a indemnización y la forma de impetrarlo, y remitir los antecedentes, cuando correspondiere, al organismo del Estado que tuviere a su cargo la representación de la víctima en el ejercicio de las respectivas acciones civiles.
  - d) Escuchar a la víctima antes de solicitar o resolver la suspensión del procedimiento o su terminación por cualquier causa.
- Si la víctima hubiere designado abogado, el ministerio público estará obligado a realizar también a su respecto las actividades señaladas en las letras a) y d) precedentes.

15 Artículo 1°.- Carabineros de Chile es una Institución policial técnica y de carácter militar, que integra la fuerza pública y existe para dar eficacia al derecho; su finalidad es garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República y cumplir las demás funciones que le encomiendan la Constitución y la ley.

Dependerá directamente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y se vinculará administrativamente con éste a través de la Subsecretaría del Interior.

Carabineros se relacionará con los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y demás autoridades Regionales, Provinciales o Comunes, por intermedio de la Dirección General, Altas Reparticiones, Reparticiones y Unidades, según corresponda.

Derivado de las particulares exigencias que imponen la función policial y la carrera profesional, los organismos y el personal que las desarrollan, así como sus institutos de formación profesional, se ajustarán a normas jurisdiccionales, disciplinarias y administrativas que se establecen en esta ley y en la legislación respectiva.

16 Artículo 3°.- Carabineros de Chile podrá establecer los servicios policiales que estime necesarios para el cumplimiento de sus finalidades específicas, de acuerdo con la Constitución Política y la legislación respectiva.

En todo caso, y en cumplimiento de la función constitucional de garantizar el orden público y la seguridad pública interior, la distribución del personal y de los medios asociados al establecimiento de servicios policiales deberá ser informada en forma global, al menos semestralmente, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Un reglamento fijará el alcance

y 4<sup>17</sup> de la ley N°18.961, orgánica constitucional de Carabineros y artículo 4<sup>18</sup> y 5<sup>19</sup> del decreto ley N°2.460 de 1979, del Ministerio de Defensa Nacional, orgánica de Policía de Investigaciones de Chile.

La Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, el Ministerio Público, Gendarmería de Chile y los tribunales con competencia en lo criminal deberán entregar las facilidades necesarias para que las mujeres víctimas de violencia puedan informar de forma expedita y oportuna cualquier incumplimiento de las medidas o diligencias decretadas y recibir la protección que resulte procedente, según corresponda.

**Artículo 17.- Primeras diligencias.** Ante hechos de violencia contra las mujeres, la Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile deberán proceder, sin previa orden, conforme a lo dispuesto en el artículo 83<sup>20</sup>

de la desagregación de la información relativa a la distribución antes referida.

Es misión esencial de la Institución desarrollar actividades tendientes a fortalecer su rol de policía preventiva.

La investigación de los delitos que las autoridades competentes encomienden a Carabineros podrá ser desarrollada en sus laboratorios y Organismos especializados.

Lo anterior, así como la actuación del personal en el sitio del suceso, se regulará por las disposiciones legales y reglamentarias respectivas.

La protección de la persona del Presidente de la República y de los Jefes de Estado extranjeros en visita oficial, como asimismo la seguridad del Palacio de Gobierno y de la residencia de estas autoridades, normalmente corresponderá a Carabineros.

La vigilancia policial de las fronteras que corresponde a Carabineros de Chile será ejercida en conformidad a las leyes y normas generales que regulan la materia.

Asimismo, la Institución tendrá a su cargo, en la forma que determine la ley, la fiscalización y el control de las personas que desarrollen actividades de vigilancia privada.

17 Artículo 4°.- Carabineros de Chile prestará a las autoridades judiciales el auxilio de la fuerza pública que éstas soliciten en el ejercicio de sus atribuciones.

Además, colaborará con los fiscales del Ministerio Público en la investigación de los delitos cuando así lo dispongan, sin perjuicio de las actuaciones que en virtud de la ley le corresponde realizar sin mediar instrucciones particulares de los fiscales. Deberá cumplir sin más trámite sus órdenes y no podrá calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, salvo requerir la exhibición de la autorización judicial previa, en su caso.

Carabineros, asimismo, prestará a las autoridades administrativas el auxilio de la fuerza pública que éstas soliciten en el ejercicio legítimo de sus atribuciones.

En situaciones calificadas, Carabineros podrá requerir a la autoridad administrativa la orden por escrito, cuando por la naturaleza de la medida lo estime conveniente para su cabal cumplimiento.

La autoridad administrativa no podrá requerir directamente el auxilio de la fuerza pública, ni Carabineros podrá concederla, respecto de asuntos que esté investigando el Ministerio Público o estén sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia y que hayan sido objeto de medidas ordenadas o decretadas por ellos y comunicadas o notificadas, en su caso, a Carabineros.

18 Artículo 4°.- La misión fundamental de la Policía de Investigaciones de Chile es investigar los delitos de conformidad a las instrucciones que al efecto dicte el Ministerio Público, sin perjuicio de las actuaciones que en virtud de la ley le corresponde realizar sin mediar instrucciones particulares de los fiscales.

19 Artículo 5°.- Corresponde en especial a Policía de Investigaciones de Chile contribuir al mantenimiento de la tranquilidad pública; prevenir la perpetración de hechos delictuosos y de actos atentatorios contra la estabilidad de los organismos fundamentales del Estado; dar cumplimiento a las órdenes emanadas del Ministerio Público para los efectos de la investigación, así como a las órdenes emanadas de las autoridades judiciales, y de las autoridades administrativas en los actos en que intervengan como tribunales especiales; prestar su cooperación a los tribunales con competencia en lo criminal; controlar el ingreso y la salida de personas del territorio nacional; adoptar todas las medidas conducentes para asegurar la correcta identificación de las personas que salen e ingresan al país, la validez y autenticidad de sus documentos de viaje y la libre voluntad de las personas de ingresar o salir de él; fiscalizar la permanencia de extranjeros en el país, representar a Chile como miembro de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), y dar cumplimiento a otras funciones que le encomienden las leyes.

20 Artículo 83.- Actuaciones de la policía sin orden previa. Corresponderá a los funcionarios de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile realizar las siguientes actuaciones, sin necesidad de recibir previamente instrucciones particulares de los fiscales:

- a) Prestar auxilio a la víctima;
- b) Practicar la detención en los casos de flagrancia, conforme a la ley;
- c) Resguardar el sitio del suceso. Deberán preservar siempre todos los lugares donde se hubiere cometido un delito o se encontraren señales o evidencias de su perpetración, fueren éstos abiertos o cerrados, públicos o privados. Para el cumplimiento de este deber, procederán a su inmediata clausura o aislamiento, impedirán el acceso a toda persona ajena a la investigación y evitarán que se alteren, modifiquen o borren de cualquier forma los rastros o vestigios del hecho, o que se remuevan o trasladen los instrumentos usados para llevarlo a cabo.

El personal policial experto deberá recoger, identificar y conservar bajo sello los objetos, documentos o instrumentos de cualquier clase que parecieren haber servido a la comisión del hecho investigado, sus efectos o los que pudieren ser utilizados como medios de prueba, para ser remitidos a quien correspondiere, dejando constancia, en el registro que se levantara, de la individualización completa del o los funcionarios policiales que llevaren a cabo esta diligencia;

En aquellos casos en que en la localidad donde ocurrieren los hechos no exista personal policial experto y la evidencia pueda desaparecer, el personal oficial que hubiese llegado al sitio del suceso deberá recogerla y guardarla en los términos indicados en el párrafo precedente y hacer entrega de ella al Ministerio Público, a la mayor brevedad posible.

En el caso de delitos flagrantes cometidos en zonas rurales o de difícil acceso, la policía deberá practicar de inmediato las primeras diligencias de investigación pertinentes, dando cuenta al fiscal que corresponda de lo hecho, a la mayor brevedad. Asimismo, el personal policial realizará siempre las diligencias señaladas en

del Código Procesal Penal y el artículo 83<sup>21</sup> de la ley N°19.968, que Crea los tribunales de familia, debiendo prestar ayuda inmediata y directa a la víctima, y detener, cuando proceda, a quien haya cometido la agresión, conforme a lo señalado en el inciso segundo del artículo 83 de la ley N° 19.968.

Además, se deberá trasladar a la mujer al servicio de salud, cuando sea procedente, entregarle información completa acerca de sus derechos y la oportunidad para ejercerlos y, en caso de haber denuncia, registrar ésta de forma completa.

**Artículo 18.- Medidas de protección y atención para mujeres víctimas de violencia sexual.** El Ministerio de Salud y los Servicios de Salud, en el marco de sus respectivas competencias, procurarán entregar, según corresponda, medidas de regulación, gestión y acción clínica orientadas a la atención de salud a las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual.

La atención de las mujeres víctimas de violencia sexual, asimismo, procurará resguardar las evidencias adecuadas para hacerse valer en el eventual proceso judicial. El Servicio Médico Legal, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para efectos de dar cumplimiento a esta disposición.

El Ministerio de Salud procurará que las medidas, acciones o servicios referidos sean prestados por personal especializado y formado con perspectiva de género.

---

la presente letra cuando reciba denuncias conforme a lo señalado en la letra e) de este artículo y dará cuenta al fiscal que corresponda inmediatamente después de realizarlas. Lo anterior tendrá lugar sólo respecto de los delitos que determine el Ministerio Público a través de las instrucciones generales a que se refiere el artículo 87. En dichas instrucciones podrá limitarse esta facultad cuando se trate de denuncias relativas a hechos lejanos en el tiempo.

- d) Identificar a los testigos y consignar las declaraciones que éstos prestaren voluntariamente, en los casos de delitos flagrantes, en que se esté resguardando el sitio del suceso, o cuando se haya recibido una denuncia en los términos de la letra b) de este artículo. Fuera de los casos anteriores, los funcionarios policiales deberán consignar siempre las declaraciones que voluntariamente presten testigos sobre la comisión de un delito o de sus partícipes o sobre cualquier otro antecedente que resulte útil para el esclarecimiento de un delito y la determinación de sus autores y partícipes, debiendo comunicar o remitir a la brevedad dicha información al Ministerio Público, todo lo anterior de acuerdo con las instrucciones generales que dicte el Fiscal Nacional según lo dispuesto en el artículo 87;
- e) Recibir las denuncias del público, y
- f) Efectuar las demás actuaciones que dispusieren otros cuerpos legales.

21 Artículo 83.- Actuación de la policía. En caso de violencia intrafamiliar que se esté cometiendo actualmente, o ante llamadas de auxilio de personas que se encontraren al interior de un lugar cerrado u otros signos evidentes que indicaren que se está cometiendo violencia intrafamiliar, los funcionarios de Carabineros o de la Policía de Investigaciones deberán entrar al lugar en que estén ocurriendo los hechos, practicar la detención del agresor, si procediere, e incautar del lugar las armas u objetos que pudieren ser utilizados para agredir a la víctima. Deberán, además, ocuparse en forma preferente de prestar ayuda inmediata y directa a esta última.

El detenido será presentado inmediatamente al tribunal competente, o al día siguiente si no fuere hora de despacho, considerándose el parte policial como denuncia. Si no fuere día hábil, el detenido deberá ser conducido, dentro del plazo máximo de 24 horas, ante el juez de garantía del lugar, a fin de que éste controle la detención y disponga las medidas cautelares que resulten procedentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de esta ley.

## TÍTULO IV

### ACCESO A LA JUSTICIA

**Artículo 19.-** **Ámbito de aplicación.** Las normas contenidas en este título se aplicarán, según corresponda:

- a) A los hechos de violencia intrafamiliar no constitutivos de delitos regulados por la ley N° 20.066, que establece la ley de violencia intrafamiliar, siempre que la víctima sea una mujer, y a los procedimientos judiciales a que ellos den lugar.
- b) A los hechos constitutivos del delito de maltrato habitual regulado en el artículo 14<sup>22</sup> de la ley N° 20.066, que establece la ley de violencia intrafamiliar, siempre que la víctima sea una mujer, y a los procedimientos judiciales a que ellos den lugar.
- c) A los hechos ocurridos en contexto de violencia intrafamiliar de conformidad con la ley N° 20.066, que establece la ley de violencia intrafamiliar, constitutivos de los delitos contenidos en el párrafo 3 del título III; en el párrafo 11 del título VI; en los párrafos 5, 6 y 9 del título VII; y en el párrafo 3 del título VIII, todos del Libro Segundo del Código Penal y a los hechos contenidos en el artículo 494 número 4<sup>23</sup> del mismo Código, siempre que la víctima sea una mujer, y a los procedimientos judiciales a que ellos den lugar.
- d) A los hechos constitutivos de los delitos contenidos en el párrafo 4 del título III y en los párrafos 5, 6 y 9 del título VII, todos del Libro Segundo del Código Penal, siempre que la víctima sea una mujer, y a los procedimientos judiciales a que ellos den lugar.
- e) Al delito de femicidio regulado en el artículo 390<sup>24</sup> del Código Penal y al procedimiento judicial al que éste dé lugar.

**Artículo 20.-** **Principios de proactividad en la investigación penal y de prevención de la victimización secundaria.** Los procesos judiciales sobre violencia contra las mujeres ante tribunales con competencias en materias de familia y penales, según corresponda, y toda diligencia previa de investigación en materia penal, se regirán por los principios de proactividad en la investigación penal y de prevención de la victimización secundaria. Se entenderán por éstos:

- c) Proactividad en la investigación penal. Quienes dirijan una investigación penal procurarán actuar con la debida diligencia durante la investigación. La recolección de evidencia y de antecedentes y el impulso de la investigación y de los procesos judiciales no podrán depender únicamente de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares, o de su aporte de otros antecedentes.

22 Artículo 14.- Delito de maltrato habitual. El ejercicio habitual de violencia física o psíquica respecto de alguna de las personas referidas en el artículo 5° de esta ley se sancionará con la pena de presidio menor en su grado mínimo, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito de mayor gravedad, caso en el cual se aplicará sólo la pena asignada por la ley a éste.

Para apreciar la habitualidad, se atenderá al número de actos ejecutados, así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferente víctima. Para estos efectos, no se considerarán los hechos anteriores respecto de los cuales haya recaído sentencia penal absolutoria o condenatoria.

El Ministerio Público sólo podrá dar inicio a la investigación por el delito tipificado en el inciso primero, si el respectivo Juzgado de Familia le ha remitido los antecedentes, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la ley N° 19.968.

23 Art. 494. Sufirán la pena de multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales:

4°. El que amenazar a otro con armas blancas o y el que riñendo con otro las sacare, como no sea con motivo justo.

24 Para el artículo 390, véase más adelante el N°4 del artículo 30 de este proyecto de ley.



- d) Prevención de la victimización secundaria. Las funcionarias o funcionarios judiciales y policiales y quienes dirijan la investigación penal procurarán proveer el mayor resguardo posible a las víctimas, con el objeto de prevenir su victimización secundaria. En particular, procurarán evitar o disminuir cualquier perturbación que hubieren de soportar con ocasión de sus actuaciones en el sistema de justicia u otros servicios públicos o los tratos fundados en estereotipos que amporen o refuercen la violencia contra las mujeres.

**Artículo 21.- Derechos y garantías judiciales.** En todo procedimiento judicial penal o de familia, referido a hechos presuntamente constitutivos de violencia contra las mujeres, se procurará otorgarles las siguientes garantías:

- a) Contar con acceso a asistencia y representación judicial.
- b) Obtener una respuesta oportuna y efectiva.
- c) Ser escuchada al momento de arribar a una decisión que la afecte. El Ministerio Público y los Tribunales de Justicia deberán resguardar y dejar constancia del ejercicio de este derecho tratándose de la procedencia de la facultad de no iniciar la investigación, el archivo provisional, el ejercicio del principio de oportunidad y en la suspensión condicional del procedimiento, respectivamente.
- d) Recibir protección cuando se encuentre amenazada o vulnerada su vida o su integridad personal.
- e) A la protección de sus datos personales respecto de terceros y de su intimidad, honor y seguridad, para lo cual el tribunal que conozca del respectivo procedimiento, podrá disponer, a petición de partes, las medidas que sean pertinentes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5<sup>25</sup> del Código Procesal Penal.
- f) Participar en el procedimiento recibiendo información de la causa sin la exigencia de formalidades que entorpezcan el acceso a la misma. En particular, podrán obtener información de la causa personalmente, sin necesidad de requerir dicha información a través de un abogado o abogada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 182<sup>26</sup> del Código Procesal Penal.

**Artículo 22.- Acceso a la información.** Quienes dirijan una investigación penal, así como los jueces o juezas y los funcionarios o funcionarias encargados del Poder Judicial deberán informar de forma diligente y adecuada a las mujeres que lo requieran acerca del estado de los procesos judiciales en que sean partes o intervinientes. El personal de las

25 Artículo 5º.- Legalidad de las medidas privativas o restrictivas de libertad. No se podrá citar, arrestar, detener, someter a prisión preventiva ni aplicar cualquier otra forma de privación o restricción de libertad a ninguna persona, sino en los casos y en la forma señalados por la Constitución y las leyes.

Las disposiciones de este Código que autorizan la restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o del ejercicio de alguna de sus facultades serán interpretadas restrictivamente y no se podrán aplicar por analogía.

26 Artículo 182.- Secreto de las actuaciones de investigación. Las actuaciones de investigación realizadas por el ministerio público y por la policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento.

El imputado y los demás intervinientes en el procedimiento podrán examinar y obtener copias, a su cargo, de los registros y documentos de la investigación fiscal y podrán examinar los de la investigación policial.

El fiscal podrá disponer que determinadas actuaciones, registros o documentos sean mantenidas en secreto respecto del imputado o de los demás intervinientes, cuando lo considerare necesario para la eficacia de la investigación. En tal caso deberá identificar las piezas o actuaciones respectivas, de modo que no se vulnere la reserva y fijar un plazo no superior a cuarenta días para la mantención del secreto, el cual podrá ser ampliado por el mismo período, por una sola vez, con motivos fundados. Esta ampliación no será oponible ni al imputado ni a su defensa.

El imputado o cualquier otro interviniente podrá solicitar del juez de garantía que ponga término al secreto o que lo limite, en cuanto a su duración, a las piezas o actuaciones abarcadas por él, o a las personas a quienes afectare.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, no se podrá decretar el secreto sobre la declaración del imputado o cualquier otra actuación en que hubiere intervenido o tenido derecho a intervenir, las actuaciones en las que participare el tribunal, ni los informes evacuados por peritos, respecto del propio imputado o de su defensor.

Los funcionarios que hubieren participado en la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tuvieran conocimiento de las actuaciones de la investigación estarán obligados a guardar secreto respecto de ellas.

instituciones antes señaladas, como, asimismo, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile deberán informar sobre los servicios, mecanismos de apoyo y medidas de protección disponibles para ellas, según corresponda a cada institución.

En particular, los órganos competentes deberán entregar información a las mujeres acerca de las vías para denunciar el incumplimiento de las medidas cautelares, de protección, accesorias, de las condiciones de la suspensión del procedimiento y de las condiciones de la libertad vigilada y la libertad vigilada intensiva, que se hayan dictado en su favor, así como la modificación o cese de las mismas, los detalles de los actos relacionados con la causa, la liberación de quienes se encuentren en prisión preventiva, el eventual derecho a obtener indemnización y otras materias que las afecten.

**Artículo 23.- Aplicación de atenuante de responsabilidad.** En los procedimientos judiciales señalados en el artículo 19 de esta ley, el juez o jueza no podrá aplicar la atenuante de responsabilidad regulada en el artículo 11 N° 5<sup>27</sup> del Código Penal cuando ésta se funde en estereotipos que amparen o refuercen la violencia contra las mujeres.

**Artículo 24.- Deberes de protección del Ministerio Público.** En virtud de las facultades y funciones que les confieren el Código Procesal Penal y la ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, quienes dirijan la investigación penal de delitos de violencia contra las mujeres, y quienes desempeñen funciones en Unidades de Atención a Víctimas y Testigos, otorgarán la debida protección a las víctimas y a las personas que se encuentren bajo su cuidado, de conformidad al artículo 78<sup>28</sup> del Código Procesal Penal, tanto a través de la adopción oportuna de medidas de protección que no impliquen la restricción de derechos de terceros, como de la solicitud de dictación de medidas cautelares judiciales.

En los casos de violencia contra las mujeres indicados en el artículo 19 de esta ley, las fiscalas y fiscales darán prioridad a la adopción y solicitud de medidas orientadas a la prevención de acciones de represalia en contra de la víctima y al resguardo de su seguridad antes, durante y después de la realización de cualquier actuación o diligencia judicial o investigativa que suponga la presencia simultánea de la víctima y el supuesto agresor o agresora en el mismo lugar. Para ello, quienes dirijan la investigación penal, cuando resulte procedente, podrán ordenar el acompañamiento policial de la víctima, sin perjuicio de otras medidas que resulten idóneas para resguardar efectivamente su seguridad e integridad personal en atención a la situación de riesgo en que ésta se encuentre.

**Artículo 25.- Medidas cautelares y de protección judicial.** El juez o jueza que tome conocimiento de cualquiera de los hechos o delitos referidos en el artículo 19 deberá adoptar de inmediato las medidas que sean necesarias para garantizar de manera eficaz y oportuna la protección y seguridad de la mujer.

En caso que la víctima sea menor de edad, el juez o jueza con competencia en materias de familia podrá adoptar, además, las medidas cautelares contempladas en el artículo 71<sup>29</sup> de la ley N° 19.968, que Crea los tribunales de familia, cumpliendo con todos los requisitos y condiciones previstas en la misma disposición.

27 Art. 11. Son circunstancias atenuantes:

5a. La de obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato y obcecación.

28 Véase nota al artículo 16.

29 Artículo 71.- Medidas cautelares especiales. En cualquier momento del procedimiento, y aun antes de su inicio, de oficio, a solicitud de la autoridad pública o de cualquier persona, cuando ello sea necesario para proteger los derechos del niño, niña o adolescente, el juez podrá adoptar las siguientes medidas cautelares:

a) Su entrega inmediata a los padres o a quienes tengan legalmente su cuidado;

**Artículo 26.- Reglas especiales para los casos de violencia sexual.** Durante los procedimientos judiciales referidos en las letras c) y d) del artículo 19 se observarán las siguientes reglas:

- a) Las conductas sexuales pasadas de la víctima no podrán ser objeto de discusión en el proceso, salvo cuando el tribunal lo estime estrictamente indispensable para la resolución del mismo. Cuando esta circunstancia proceda, el tribunal procurará considerarlas sin reproducir estereotipos discriminatorios contra las mujeres.
- b) El tribunal no podrá basarse exclusivamente en el tiempo transcurrido entre la comisión de los hechos y la presentación de la denuncia para fundamentar su decisión, sin perjuicio de las reglas del artículo 94<sup>30</sup> del Código Penal. Del mismo modo, no se podrá negar la dictación de una medida de protección debido al tiempo transcurrido entre los hechos y la presentación de la denuncia.
- c) Las mujeres víctimas de violencia sexual tienen derecho a que se preserve en todo momento su intimidad y privacidad, manteniendo la confidencialidad respecto de terceros ajenos al procedimiento de la información sobre su nombre, residencia, teléfono, lugar de trabajo o estudio, entre otros, incluyendo la de su familia y personas allegadas. Esta protección es irrenunciable para las mujeres menores de 18 años.

**Artículo 27.- De la prestación de asesoría judicial en casos de violencia contra las mujeres.** El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, en los casos calificados por el mismo, podrá asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de los hechos de violencia o de los delitos mencionados en el artículo 19 de esta ley, que sean mayores de edad y que así lo requirieren, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 109<sup>31</sup> del Código

- b) Confiarlo al cuidado de una persona o familia en casos de urgencia. El juez preferirá, para que asuman provisoriamente el cuidado, a sus parientes consanguíneos o a otras personas con las que tenga relación de confianza;
- c) El ingreso a un programa de familias de acogida o centro de diagnóstico o residencia, por el tiempo que sea estrictamente indispensable. En este caso, de adoptarse la medida sin la comparecencia del niño, niña o adolescente ante el juez, deberá asegurarse que ésta se verifique a primera hora de la audiencia más próxima;
- d) Disponer la concurrencia de niños, niñas o adolescentes, sus padres, o las personas que los tengan bajo su cuidado, a programas o acciones de apoyo, reparación u orientación, para enfrentar y superar las situaciones de crisis en que pudieren encontrarse, e impartir las instrucciones pertinentes;
- e) Suspender el derecho de una o más personas determinadas a mantener relaciones directas o regulares con el niño, niña o adolescente, ya sea que éstas hayan sido establecidas por resolución judicial o no lo hayan sido;
- f) Prohibir o limitar la presencia del ofensor en el hogar común;
- g) Prohibir o limitar la concurrencia del ofensor al lugar de estudio del niño, niña o adolescente, así como a cualquier otro lugar donde éste o ésta permanezca, visite o concurra habitualmente. En caso de que concurran al mismo establecimiento, el juez adoptará medidas específicas tendientes a resguardar los derechos de aquéllos.
- h) La internación en un establecimiento hospitalario, psiquiátrico o de tratamiento especializado, según corresponda, en la medida que se requiera de los servicios que éstos ofrecen y ello sea indispensable frente a una amenaza a su vida o salud, e
- i) La prohibición de salir del país para el niño, niña o adolescente sujeto de la petición de protección.

En ningún caso, podrá ordenarse como medida de protección el ingreso de un niño, niña o adolescente a un establecimiento penitenciario para adultos.

La resolución que determine la imposición de una medida cautelar deberá fundarse en antecedentes que sean calificados como suficientes para ameritar su adopción, de los que se dejará expresa constancia en la misma.

Para el cumplimiento de las medidas decretadas, el juez podrá requerir el auxilio de Carabineros de Chile.

Cuando la adopción de cualquier medida cautelar tenga lugar antes del inicio del procedimiento, el juez fijará desde luego la fecha en que deberá llevarse a cabo la audiencia preparatoria, para dentro de los cinco días siguientes contados desde la adopción de la medida.

En ningún caso la medida cautelar decretada de conformidad a este artículo podrá durar más de noventa días.

30 Art. 94. La acción penal prescribe:

Respecto de los crímenes a que la ley impone pena de presidio, reclusión o relegación perpetuos, en quince años.

Respecto de los demás crímenes, en diez años.

Respecto de los simples delitos, en cinco años.

Respecto de la faltas, en seis meses.

Cuando la pena señalada al delito sea compuesta, se estará a la privativa de libertad, para la aplicación de las reglas comprendidas en los tres primeros acápites de este artículo; si no se impusieron penas privativas de libertad, se estará a la mayor.

Las reglas precedentes se entienden sin perjuicio de las prescripciones de corto tiempo que establece este Código para delitos determinados.

31 Artículo 109.- Derechos de la víctima. La víctima podrá intervenir en el procedimiento penal conforme a lo establecido en este Código, y tendrá, entre otros, los siguientes derechos:

Procesal Penal. Para ello se aplicará lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 20<sup>32</sup> de la ley N° 20.066, que Establece la ley de violencia intrafamiliar.

En el caso del delito de femicidio regulado en el artículo 390<sup>33</sup> del Código Penal, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género podrá deducir querella.

**Artículo 28.-** Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 20.066, que Establece ley de violencia intrafamiliar:

1) Sustitúyese el artículo 1 por el siguiente:

“Artículo 1.- Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, todas las formas y manifestaciones de violencia que se ejercen dentro del espacio doméstico, de las familias y de las relaciones de pareja, y otorgar protección efectiva a quienes la sufren.

En la interpretación y aplicación de la presente ley, las autoridades tendrán en consideración todos los derechos y garantías que les son reconocidos a las personas en la Constitución, en las leyes, en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.”.

2) Intercálase en el artículo 2 el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Corresponderá especialmente a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, en el ámbito de sus competencias, integrar en forma transversal en su actuar los objetivos de prevención, sanción y erradicación de todas las formas y manifestaciones de la violencia que se ejerce dentro del espacio doméstico, de las familias y de las relaciones de pareja.”<sup>34</sup>.

- 
- a) Solicitar medidas de protección frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados en contra suya o de su familia;
  - b) Presentar querella;
  - c) Ejercer contra el imputado acciones tendientes a perseguir las responsabilidades civiles provenientes del hecho punible;
  - d) Ser oída, si lo solicitare, por el fiscal antes de que éste pidiere o se resolviere la suspensión del procedimiento o su terminación anticipada;
  - e) Ser oída, si lo solicitare, por el tribunal antes de pronunciarse acerca del sobreseimiento temporal o definitivo u otra resolución que pusiere término a la causa, y
  - f) Impugnar el sobreseimiento temporal o definitivo o la sentencia absolutoria, aun cuando no hubiere intervenido en el procedimiento.
- Los derechos precedentemente señalados no podrán ser ejercidos por quien fuere imputado del delito respectivo, sin perjuicio de los derechos que le correspondieren en esa calidad.

32 Artículo 20.- Representación judicial de la víctima. En casos calificados por el Servicio Nacional de la Mujer, éste podrá asumir el patrocinio y representación de la mujer víctima de delitos constitutivos de violencia intrafamiliar que sea mayor de edad, si ella así lo requiere, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 109 del Código Procesal Penal. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, el Servicio podrá celebrar convenios con entidades públicas o privadas.

33 Véase más adelante el N°4 del artículo 30.

34 Quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 2°.- Obligación de protección. Es deber del Estado adoptar las medidas conducentes para garantizar la vida, integridad personal y seguridad de los miembros de la familia.

Corresponderá especialmente a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, en el ámbito de sus competencias, integrar en forma transversal en su actuar los objetivos de prevención, sanción y erradicación de todas las formas y

3) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 3:

- a) Sustitúyese en el inciso primero, la frase “la mujer, los adultos mayores y los niños,”, por “las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, los niños y las niñas,”.
- b) Agrégase en la letra e) de su inciso segundo, entre la expresión “Niño,” e “y”, la oración “la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”<sup>35</sup>.

4) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 4:

- a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente: “Corresponderá conjuntamente a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, proponer al Presidente o Presidenta de la República las políticas públicas para el cumplimiento de los objetivos de esta ley.”.
- b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:  
  
“Para los efectos del inciso anterior los referidos Ministerios, coordinados por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, formularán anualmente un plan nacional de acción, en colaboración con los organismos públicos y privados pertinentes.”.
- c) Sustitúyese en el inciso tercero, en su letra c), la expresión “contra la mujer”, por la siguiente frase: “intrafamiliar y la violencia contra las mujeres”<sup>36</sup>.

5) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 5:

- a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:

---

manifestaciones de la violencia que se ejerce dentro del espacio doméstico, de las familias y de las relaciones de pareja.

35 Quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 3°.- Prevención y Asistencia. El Estado adoptará políticas orientadas a prevenir la violencia intrafamiliar, en especial contra las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, los niños y las niñas, y a prestar asistencia a las víctimas.

Entre otras medidas, implementará las siguientes:

- a) Incorporar en los planes y programas de estudio contenidos dirigidos a modificar las conductas que favorecen, estimulan o perpetúan la violencia intrafamiliar;
- b) Desarrollar planes de capacitación para los funcionarios públicos que intervengan en la aplicación de esta ley;
- c) Desarrollar políticas y programas de seguridad pública para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar;
- d) Favorecer iniciativas de la sociedad civil para el logro de los objetivos de esta ley;
- e) Adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y demás instrumentos internacionales suscritos por el Estado de Chile, y
- f) Crear y mantener sistemas de información y registros estadísticos en relación con la violencia intrafamiliar.

36 El artículo 4° quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 4°.- Corresponderá conjuntamente a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, proponer al Presidente o Presidenta de la República las políticas públicas para el cumplimiento de los objetivos de esta ley.

Para los efectos del inciso anterior los referidos Ministerios, coordinados por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, formularán anualmente un plan nacional de acción, en colaboración con los organismos públicos y privados pertinentes.

Para los efectos de los incisos anteriores, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género tendrá las siguientes funciones:

- a) Impulsar, coordinar y evaluar las políticas gubernamentales en contra de la violencia intrafamiliar;
- b) Recomendar la adopción de medidas legales, reglamentarias o de otra naturaleza para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar;
- c) Promover la contribución de los medios de comunicación para erradicar la violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres y realzar el respeto a su dignidad.

Corresponderá al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género prestar asistencia técnica a los organismos que intervengan en la aplicación de esta ley que así lo requieran.

“Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida, la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad sexual, o la subsistencia o autonomía económica de la persona que tenga o haya tenido la calidad de cónyuge o conviviente civil o de hecho de quien agrede, sea del mismo o de diferente sexo, o que sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, de quien agrede o de su cónyuge o de su actual conviviente.”.

- b) Sustitúyese el punto final del inciso segundo por la siguiente expresión: “, o tenga lugar entre personas que tienen o han tenido una relación de pareja con o sin convivencia.” <sup>37</sup>.

6) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 7:

- a) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:

“Para efectos de determinar si existe riesgo inminente para la víctima de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, el juez o jueza deberá atender especialmente a la situación en que se encuentra la víctima, considerando, por ejemplo, su dependencia económica respecto del ofensor u ofensora.”.

- b) Intercálase el siguiente inciso tercero, nuevo:

“Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente como la descrita en el inciso anterior cuando concorra cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Que haya precedido intimidación de causar daño por parte del ofensor u ofensora.
2. Que, además de lo descrito en el número 1, concurren respecto del ofensor u ofensora circunstancias o antecedentes tales como: drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal o por infracción a la ley N° 17.798<sup>38</sup>, o antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características de personalidad violenta.
3. Que la persona denunciada oponga o haya opuesto, de manera violenta, su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima.
4. Que una persona adulta mayor, dueña o poseedora, a cualquier título, de un inmueble que ocupa para residir, sea expulsado de él, relegado a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz, por alguna de las personas señaladas en el artículo 5.”.

- c) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:

<sup>37</sup> Quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 5°.- Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida, la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad sexual, o la subsistencia o autonomía económica de la persona que tenga o haya tenido la calidad de cónyuge o conviviente civil o de hecho de quien agrede, sea del mismo o de diferente sexo, o que sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, de quien agrede o de su cónyuge o de su actual conviviente.

También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente ocurra entre los padres de un hijo común, o recaiga sobre persona menor de edad, adulto mayor o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar, o tenga lugar entre personas que tienen o han tenido una relación de pareja con o sin convivencia.

<sup>38</sup> Establece el control de armas.

“Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de un niño o niña, una persona adulta mayor, una persona en situación de discapacidad o que tenga una condición que la haga vulnerable.”<sup>39</sup>.

- 7) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 8, la frase “de la notificación de la sentencia”, por la expresión “en que la sentencia quede firme y ejecutoriada”<sup>40</sup>.

- 8) Agrégase el siguiente artículo 11 bis, nuevo:

“Artículo 11 bis.- Otras materias de familia. El juez o jueza de familia que deba resolver cualquier materia dentro del ámbito de su competencia, especialmente aquéllas comprendidas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 8 de la ley N° 19.968<sup>41</sup>, dará la debida consideración al hecho de existir antecedentes de violencia intrafamiliar entre las partes involucradas o entre una de las partes involucradas y cualquiera de las personas señaladas en el artículo 5<sup>42</sup> de esta ley.

En particular, la determinación del régimen de cuidado personal de un niño o niña, respecto de la persona a quien se confiará éste, tomará en especial consideración el hecho de existir una o más condenas por actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad al artículo 5 de esta ley; por el delito de maltrato habitual,

39 Quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 7°.- Situación de riesgo. Cuando exista una situación de riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, aun cuando éste no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el solo mérito de la denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan.

Para efectos de determinar si existe riesgo inminente para la víctima de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, el juez o jueza deberá atender especialmente a la situación en que se encuentra la víctima, considerando, por ejemplo, su dependencia económica respecto del ofensor u ofensora.

Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente como la descrita en el inciso anterior cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Que haya precedido intimidación de causar daño por parte del ofensor u ofensora.
2. Que, además de lo descrito en el número 1, concurran respecto del ofensor u ofensora circunstancias o antecedentes tales como: drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal o por infracción a la ley N° 17.798, o antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características de personalidad violenta.
3. Que la persona denunciada oponga o haya opuesto, de manera violenta, su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima.
4. Que una persona adulta mayor, dueña o poseedora, a cualquier título, de un inmueble que ocupa para residir, sea expulsado de él, relegado a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz, por alguna de las personas señaladas en el artículo 5.

Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de un niño o niña, una persona adulta mayor, una persona en situación de discapacidad o que tenga una condición que la haga vulnerable.

40 Quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 8°.- Sanciones. Se castigará el maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, atendida su gravedad, con una multa de media a quince unidades tributarias mensuales a beneficio del gobierno regional del domicilio del denunciante o demandante, para ser destinada a los centros de atención de víctimas de violencia intrafamiliar existentes en la región respectiva y que sean de financiamiento público o privado.

El condenado deberá acreditar el pago de la multa dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que la sentencia quede firme y ejecutoriada, a menos que el juez, por motivos fundados, prorrogue dicho término hasta por quince días.

En caso de incumplimiento el tribunal remitirá los antecedentes al Ministerio Público, conforme a lo dispuesto en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.

41 Artículo 8°.- Competencia de los juzgados de familia. Corresponderá a los juzgados de familia conocer y resolver las siguientes materias:

- 1) Las causas relativas al derecho de cuidado personal de los niños, niñas o adolescentes;
- 2) Las causas relativas al derecho y el deber del padre o de la madre que no tenga el cuidado personal del hijo, a mantener con éste una relación directa y regular;
- 3) Las causas relativas al ejercicio, suspensión o pérdida de la patria potestad; a la emancipación y a las autorizaciones a que se refieren los Párrafos 2° y 3° del Título X del Libro I del Código Civil.

42 El artículo 5° de la ley 20.066 se modificó por el N°5 del artículo 28 de este proyecto de ley.



regulado en el artículo 14 de esta ley; y por los delitos contenidos en el Párrafo 11 del Título VI; los Párrafos 5, 6 y 9 del Título VII; en el Párrafo 3 del Título VIII, todos del libro segundo del Código Penal. Estas consideraciones se realizarán con independencia de que la agresión se haya ejercido en contra del niño o niña en cuestión o de otra persona del mismo grupo familiar. La resolución judicial que establezca tal régimen, sea provisorio o definitivo, deberá sustentarse en razones muy calificadas que lo hagan procedente, las cuales el juez o jueza deberá fundamentar debidamente en su sentencia. Para determinar dicho régimen, el juez o jueza deberá escuchar y otorgar la debida consideración a la opinión del niño o niña y velar por la protección de su seguridad e interés superior.

Del mismo modo, la fijación de un régimen de relación directa y regular entre una persona y sus hijos o hijas menores de edad tomará en especial consideración el hecho de habersele condenado por actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad al artículo 5 de esta ley; por el delito de maltrato habitual, regulado en el artículo 14 de esta ley; y por los delitos contenidos en el Párrafo 11 del Título VI; los Párrafos 5, 6 y 9 del Título VII; en el Párrafo 3 del Título VIII, todos del libro segundo del Código Penal. Estas condenas se considerarán con independencia de que la agresión se haya ejercido en contra del niño o niña en cuestión o de otra persona del mismo grupo familiar.

La fijación del régimen, sea provisional o definitivo, no podrá, en caso alguno, implicar la infracción o incumplimiento de cualquier medida de protección, cautelar, accesoria o condición decretada para suspender el procedimiento penal que se encuentre vigente respecto de cualquier miembro del grupo familiar.

En caso de que por motivos estrictamente justificados resulte procedente la regulación de un régimen de relación directa y regular, éste deberá resguardar el interés superior del niño o niña y la seguridad de la persona víctima de violencia. Para determinar dicho régimen, el juez o jueza deberá escuchar y otorgar la debida consideración a la opinión del niño o niña y velar por la protección de su seguridad e interés superior.

Para efectos de lo dispuesto en los incisos anteriores, el juez o jueza deberá dar especial consideración al hecho de que la violencia ejercida en contra de cualquier integrante del grupo familiar vulnera gravemente el interés superior del niño o niña, aun cuando dicha violencia no se haya dirigido específicamente en contra de él o ella.”

9) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 14 bis:

- a) Agrégase como encabezado el siguiente título “Aplicación de atenuantes de responsabilidad penal”.
- b) Agrégase luego de la palabra “considerar”, el adverbio “especialmente”.<sup>43</sup>

10) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 15:

- a) Sustitúyase la expresión “y las aludidas en el artículo 7 de esta ley.” por la siguiente, “, las contempladas en el Código Procesal Penal y en esta ley.”.
- b) Agréguese el siguiente inciso segundo, nuevo:

“En caso de decretarse la medida contemplada en el número 2 del artículo 92 de la ley N° 19.968 o cualquier otra que comprenda el ingreso o presencia de la víctima en un lugar donde pueda encontrarse el ofensor, el juez o jueza

43 Quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 14 bis.- Aplicación de atenuantes de responsabilidad penal. En los delitos constitutivos de violencia intrafamiliar, el juez, para efectos de evaluar la irreprochable conducta anterior del imputado, deberá considerar especialmente las anotaciones que consten en el registro a que se refiere el artículo 12 de esta ley.



podrá decretar, además, de oficio o a petición de parte, y cuando esto fuere necesario para resguardar la seguridad de la víctima, que la víctima sea acompañada por personal de Carabineros de Chile durante el retiro o entrega de sus efectos personales.”

c) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo:

“En el caso de la prisión preventiva, deberá atenderse a las reglas del párrafo 4 del Título V del Libro Primero del Código Procesal Penal.”<sup>44</sup>.

11) Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto al artículo 17, pasando su inciso único a ser inciso primero:

“En ningún caso podrá decretarse la suspensión del procedimiento imponiéndose como única condición a la persona imputada la medida de asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar.

Para decretar la suspensión condicional del procedimiento deberá tenerse en especial consideración la seguridad de la víctima, apreciándose situaciones tales como la existencia de riesgo inminente en los términos del artículo 7 de esta ley<sup>45</sup>, el comportamiento del ofensor u ofensora y la existencia de antecedentes y denuncias previas, entre otros.

La víctima y el querellante deberán ser siempre notificados de la citación a la audiencia en que se ventile la solicitud de suspensión condicional del procedimiento. Durante dicha audiencia, si la víctima o el querellante estuviesen presentes, serán oídos por el juez o jueza y su opinión será debidamente considerada.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior, el juez o la jueza deberá ofrecer a la víctima la posibilidad de emitir su opinión en audiencia reservada, a fin de cautelar su seguridad y evitar cualquier tipo de presión sobre ella por parte de la persona imputada.

En todo lo demás se aplicarán las reglas establecidas en el Código Procesal Penal.”<sup>46</sup>.

44 Quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 15.- Medidas cautelares. En cualquier etapa de la investigación o del procedimiento sobre delitos constitutivos de violencia intrafamiliar, y aun antes de la formalización, el tribunal con competencia en lo penal podrá decretar las medidas cautelares que sean necesarias para proteger a la víctima de manera eficaz y oportuna, tales como las que establece el artículo 92 de la ley N° 19.968, las contempladas en el Código Procesal Penal y en esta ley.

En caso de decretarse la medida contemplada en el número 2 del artículo 92 de la ley N° 19.968 o cualquier otra que comprenda el ingreso o presencia de la víctima en un lugar donde pueda encontrarse el ofensor, el juez o jueza podrá decretar, además, de oficio o a petición de parte, y cuando esto fuere necesario para resguardar la seguridad de la víctima, que la víctima sea acompañada por personal de Carabineros de Chile durante el retiro o entrega de sus efectos personales.

En el caso de la prisión preventiva, deberá atenderse a las reglas del párrafo 4 del Título V del Libro Primero del Código Procesal Penal.

45 Se refiere a la ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar. Su artículo 7° se modificó por el N°6 del artículo 28 de este proyecto de ley.

46 Quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 17.- Condiciones para la suspensión del procedimiento. Para decretar la suspensión del procedimiento, el juez de garantía impondrá como condición una o más de las medidas accesorias establecidas en el artículo 9°, sin perjuicio de las demás que autoriza el artículo 238 del Código Procesal Penal.

En ningún caso podrá decretarse la suspensión del procedimiento imponiéndose como única condición a la persona imputada la medida de asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar.

Para decretar la suspensión condicional del procedimiento deberá tenerse en especial consideración la seguridad de la víctima, apreciándose situaciones tales como la existencia de riesgo inminente en los términos del artículo 7 de esta ley, el comportamiento del ofensor u ofensora y la existencia de antecedentes y denuncias previas, entre otros.

La víctima y el querellante deberán ser siempre notificados de la citación a la audiencia en que se ventile la solicitud de suspensión condicional del procedimiento. Durante dicha audiencia, si la víctima o el querellante estuviesen presentes, serán oídos por el juez o jueza y su opinión será debidamente considerada.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior, el juez o la jueza deberá ofrecer a la víctima la posibilidad de emitir su opinión en audiencia reservada, a fin de cautelar su seguridad y evitar cualquier tipo de presión sobre ella por parte de la persona imputada.

En todo lo demás se aplicarán las reglas establecidas en el Código Procesal Penal.

- 12) Agrégase el siguiente inciso segundo al artículo 18, pasando su inciso único a ser inciso primero:

“En caso de incumplimiento sin justificación, grave o reiterado de las condiciones impuestas de conformidad con el artículo 17, además de lo dispuesto en el inciso anterior, el juez o la jueza de garantía revocará la suspensión condicional del procedimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 239 del Código Procesal Penal. Sin perjuicio de lo anterior, el juez o jueza deberá considerar especialmente la seguridad de la víctima.”<sup>47</sup>.

**Artículo 29.-** Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia:

- 1) Agrégase en el inciso tercero del artículo 21, entre las palabras “juez” y “ordenará” la frase “o jueza citará a las partes, en forma inmediata, a una nueva audiencia. Si a ésta no concurriere ninguna de las partes, el juez o jueza”<sup>48</sup>.
- 2) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 90:
  - a) Sustitúyese en el inciso tercero la expresión “el fiscal no solicite”, por la siguiente, “el juez o jueza de garantía no decreta”.
  - b) Suprímese el inciso cuarto<sup>49</sup>.
- 3) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 93:

47 Quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 18.- Sanciones. En caso de incumplimiento de las medidas a que se refieren los artículos 15, 16 y 17, se aplicará lo dispuesto en el artículo 10.

En caso de incumplimiento sin justificación, grave o reiterado de las condiciones impuestas de conformidad con el artículo 17, además de lo dispuesto en el inciso anterior, el juez o la jueza de garantía revocará la suspensión condicional del procedimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 239 del Código Procesal Penal. Sin perjuicio de lo anterior, el juez o jueza deberá considerar especialmente la seguridad de la víctima.

48 Quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 21.- Abandono del procedimiento. Si llegado el día de la celebración de las audiencias fijadas, no concurriere ninguna de las partes que figuren en el proceso, y el demandante o solicitante no pidiera una nueva citación dentro de quinto día, el juez de familia procederá a declarar el abandono del procedimiento y ordenará el archivo de los antecedentes.

No obstante, en los asuntos a que se refieren los números 7), 8), 9), 11) y 12) del artículo 8°, el juez citará a las partes, en forma inmediata, a una nueva audiencia bajo apercibimiento de continuar el procedimiento y resolver de oficio.

En las causas sobre violencia intrafamiliar, de verificarse las circunstancias previstas en el inciso primero, el juez o jueza citará a las partes, en forma inmediata, a una nueva audiencia. Si a ésta no concurriere ninguna de las partes, el juez o jueza ordenará el archivo provisional de los antecedentes, pudiendo el denunciante o demandante solicitar, en cualquier momento, la reapertura del procedimiento. Transcurridos un año desde que se decreta el archivo provisional sin haberse requerido la reanudación del procedimiento, se declarará, de oficio o a petición de parte, el abandono del procedimiento, debiendo el juez dejar sin efecto las medidas cautelares que haya fijado.

49 Quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 90.- Remisión de antecedentes si el hecho denunciado reviste caracteres de delito. En caso que los hechos en que se fundamenta la denuncia o la demanda sean constitutivos de delito, el juez deberá enviar de inmediato los antecedentes al Ministerio Público.

Si de los antecedentes examinados en la audiencia preparatoria o en la del juicio aparece que el denunciado o demandado ha ejercido violencia en los términos establecidos en el artículo 14 de la Ley sobre Violencia Intrafamiliar, el tribunal los remitirá al Ministerio Público.

Previo a remitir una causa al Ministerio Público, el juez de familia adoptará las medidas cautelares que correspondan, las que se mantendrán vigentes en tanto el juez o jueza de garantía no decreta su modificación o cese.

Si se plantea una contienda de competencia relacionada a un asunto de violencia intrafamiliar entre un juez de familia y el Ministerio Público o un juez de garantía, el juez de familia involucrado podrá adoptar las medidas cautelares que sean procedentes, las que se mantendrán vigentes hasta que la contienda de competencia sea resuelta.

- a) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

“Además, el juez o jueza deberá comunicar de inmediato, en la forma y por los medios más expeditos posibles, las medidas cautelares decretadas a Carabineros de Chile, en los casos que corresponda.”.

- b) Agrégase en el actual inciso segundo, que pasa a ser inciso tercero, luego de la palabra “decretadas”, la siguiente expresión “y para resguardar la seguridad de la víctima”<sup>50</sup>.

- 4) Agrégase el siguiente artículo 93 bis, nuevo:

“Artículo 93 bis.- Notificación de las medidas cautelares. Junto con lo dispuesto en el artículo anterior, al decretar las medidas cautelares el juez o jueza ordenará su notificación al ofensor y ofensora y cautelará especialmente que se resguarde la seguridad de la víctima, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública. De las medidas que se adopten para cautelar la seguridad de la víctima y del seguimiento de las mismas se dejará registro expreso en la causa.

Una vez practicada la notificación se deberá comunicar de inmediato, en la forma y por los medios más expeditos posibles, esta circunstancia al Tribunal que hubiere decretado la medida, a Carabineros de Chile y a la fiscalía local que corresponda.”.

- 5) Agrégase en el artículo 96 el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando su actual inciso tercero a ser inciso cuarto:

“El sometimiento de las partes a mediación no se aplicará en aquellos casos en que la violencia haya sido ejercida en contra de una persona con quien el ofensor u ofensora tenga hijos o hijas, o haya tenido una relación de pareja con o sin convivencia. En tales casos, el juez o jueza deberá cautelar personalmente que las obligaciones que se establezcan en virtud de la letra a) del inciso primero ofrezcan una satisfacción efectiva a la víctima y sus hijos e hijas, en caso que corresponda, y resguarden su bienestar. Para ello, el juez o jueza deberá citar a una audiencia para efectos de acordar las condiciones de la suspensión de la dictación de la sentencia, para cuya realización la víctima deberá comparecer con su abogado o abogada.”<sup>51</sup>.

50 Quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 93.- Comunicación y ejecución de las medidas cautelares. El juez, en la forma y por los medios más expeditos posibles, pondrá en conocimiento de la víctima las medidas cautelares decretadas, otorgándole la certificación correspondiente.

Además, el juez o jueza deberá comunicar de inmediato, en la forma y por los medios más expeditos posibles, las medidas cautelares decretadas a Carabineros de Chile, en los casos que corresponda.

Asimismo, el juez podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, disponer su intervención con facultades de allanamiento y descerrajamiento y ejercer, sin más trámite, los demás medios de acción conducentes para el cumplimiento de las medidas cautelares decretadas y para resguardar la seguridad de la víctima.

51 Quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 96.- Suspensión condicional de la dictación de la sentencia. Si el denunciado o demandado reconoce ante el tribunal los hechos sobre los que versa la demanda o denuncia y existen antecedentes que permiten presumir fundadamente que no ejecutará actos similares en lo sucesivo, el juez podrá suspender condicionalmente la dictación de la sentencia, siempre y cuando se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:

- Que se hayan establecido y aceptado por las partes obligaciones específicas y determinadas respecto de sus relaciones de familia y aquellas de carácter reparatorio a satisfacción de la víctima;
- Que se haya adquirido por el demandado o denunciado, con el acuerdo de la víctima, el compromiso de observancia de una o más de las medidas cautelares previstas en esta ley por un lapso no inferior a seis meses ni superior a un año.

En todo caso, el tribunal, previo acuerdo de las partes y en conformidad a lo dispuesto en el inciso primero, podrá someter a mediación el conflicto para los efectos de la letra a). Aprobada el acta de mediación, el juez suspenderá condicionalmente la dictación de la sentencia. Para efectos de lo dispuesto en este artículo, el juez deberá ser asesorado por uno o más miembros del consejo técnico, asegurándose que las partes estén en capacidad para negociar libremente y en un plano de igualdad.

El sometimiento de las partes a mediación no se aplicará en aquellos casos en que la violencia haya sido ejercida en contra de una persona con quien el ofensor u ofensora

6) Sustitúyese el inciso sexto del artículo 106 por el siguiente, nuevo:

“Tampoco se someterán a mediación los asuntos, incluidos aquéllos mencionados en el inciso primero, en que una de ellas haya sido condenada por delitos constitutivos de violencia intrafamiliar o tenga anotaciones en el Registro Especial establecido en el artículo 12 de la ley N° 20.066, por agredir a la otra. Asimismo, no se someterán a mediación los asuntos en que exista una medida cautelar o de protección vigente entre las partes.”<sup>52</sup>.

**Artículo 30.-** Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Penal:

1) Agrégase el siguiente artículo 161-C, nuevo:

“Artículo 161–C.- Será sancionado con multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales, el que, sin la autorización de la persona afectada, difunda por cualquier medio, sea físico o electrónico, imágenes o videos de una persona mayor de 18 años, que hubiere obtenido con su anuencia en un recinto particular o en lugares que no sean de libre acceso al público, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad de esa persona.

Si la difusión de las imágenes o videos señalados en el inciso primero incluye o se acompaña de información personal de la víctima tal como su nombre, domicilio, lugar de trabajo o estudio o cualquier otro dato de carácter personal, se impondrá la pena de multa de quince a veinte unidades tributarias mensuales.

Las sanciones de los incisos precedentes se aplicarán tanto a la persona que realice la publicación o difusión del material, como a quien haya suministrado a éste las imágenes o videos.”.

2) Agrégase en el artículo 366 el siguiente inciso tercero, nuevo:

---

tenga hijos o hijas, o haya tenido una relación de pareja con o sin convivencia. En tales casos, el juez o jueza deberá cautelar personalmente que las obligaciones que se establezcan en virtud de la letra a) del inciso primero ofrezcan una satisfacción efectiva a la víctima y sus hijos e hijas, en caso que corresponda, y resguarden su bienestar. Para ello, el juez o jueza deberá citar a una audiencia para efectos de acordar las condiciones de la suspensión de la dictación de la sentencia, para cuya realización la víctima deberá comparecer con su abogado o abogada.

La resolución que apruebe la suspensión de la sentencia será inscrita en el registro especial que para estos procesos mantiene el Servicio de Registro Civil e Identificación, en los mismos términos que la sentencia.

52 Quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 106.- Mediación previa, voluntaria y prohibida. Las causas relativas al derecho de alimentos, cuidado personal y al derecho de los padres e hijos e hijas que vivan separados a mantener una relación directa y regular, aun cuando se deban tratar en el marco de una acción de divorcio o separación judicial, deberán someterse a un procedimiento de mediación previo a la interposición de la demanda, el que se regirá por las normas de esta ley y su reglamento.

Lo dispuesto en el inciso anterior no se aplicará a los casos del artículo 54 de la ley N° 19.947.

Las partes quedarán exentas del cumplimiento de este requisito, si acreditaren que antes del inicio de la causa, sometieron el mismo conflicto a mediación ante mediadores inscritos en el registro a que se refiere el artículo 112 o si hubieren alcanzado un acuerdo privado sobre estas materias.

Las restantes materias de competencia de los juzgados de familia, exceptuadas las señaladas en el inciso siguiente, podrán ser sometidas a mediación si así lo acuerdan o lo aceptan las partes.

No se someterán a mediación los asuntos relativos al estado civil de las personas, salvo en los casos contemplados por la Ley de Matrimonio Civil; la declaración de interdicción; las causas sobre maltrato de niños, niñas o adolescentes, y los procedimientos regulados en la ley N° 19.620, sobre adopción.

Tampoco se someterán a mediación los asuntos, incluidos aquéllos mencionados en el inciso primero, en que una de ellas haya sido condenada por delitos constitutivos de violencia intrafamiliar o tenga anotaciones en el Registro Especial establecido en el artículo 12 de la ley N° 20.066, por agredir a la otra. Asimismo, no se someterán a mediación los asuntos en que exista una medida cautelar o de protección vigente entre las partes.

“Si el delito a que se refiere el inciso primero se realizare con una persona mayor de catorce años, sin la concurrencia de alguna de las circunstancias enumeradas en los artículos 361 y 363, será sancionado con presidio menor en su grado mínimo.”<sup>53</sup>.

3) Suprímese el inciso final del artículo 369<sup>54</sup>.

4) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 390:

- a) Agrégase, en el inciso primero, entre las palabras “conviviente” y “será”, la frase “, civil o de hecho,”.
- b) Agrégase, en el inciso segundo, entre las palabras “conviviente” y “de” la frase “civil o de hecho”.
- c) Agrégase, en el inciso segundo, entre las palabras “autor” y “el”, la frase “o tiene o ha tenido con éste una relación de pareja sin convivencia.”<sup>55</sup>.

5) Agrégase el siguiente artículo 494 ter, nuevo:

“Artículo 494 ter.- Comete acoso sexual y será castigado con multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales el que incurriere en alguna de las siguientes conductas:

1° Captar imágenes, videos o cualquier registro audiovisual del cuerpo o alguna parte del cuerpo de otra persona, sin su consentimiento y con fines primordialmente sexuales, salvo que los hechos sean constitutivos de un delito de mayor gravedad, caso en el cual se aplicará sólo la pena asignada por la ley a éste.

2° Hostigar a otra persona mediante la exhibición de sus genitales o realización de acciones de masturbación en lugares públicos.

53 Quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 366.- El que abusivamente realizare una acción sexual distinta del acceso carnal con una persona mayor de catorce años, será castigado con presidio menor en su grado máximo, cuando el abuso consistiere en la concurrencia de alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 361.

Igual pena se aplicará cuando el abuso consistiere en la concurrencia de alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 363, siempre que la víctima fuere mayor de catorce y menor de dieciocho años.

Si el delito a que se refiere el inciso primero se realizare con una persona mayor de catorce años, sin la concurrencia de alguna de las circunstancias enumeradas en los artículos 361 y 363, será sancionado con presidio menor en su grado mínimo.

54 Quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 369.- No se puede proceder por causa de los delitos previstos en los artículos 361 a 366 quáter, sin que, a lo menos, se haya denunciado el hecho a la justicia, al Ministerio Público o a la policía por la persona ofendida o por su representante legal.

Si la persona ofendida no pudiere libremente hacer por sí misma la denuncia, ni tuviere representante legal, o si, teniéndolo, estuviere imposibilitado o implicado en el delito, podrá procederse de oficio por el Ministerio Público, que también estará facultado para deducir las acciones civiles a que se refiere el artículo 370. Sin perjuicio de lo anterior, cualquier persona que tome conocimiento del hecho podrá denunciarlo.

Con todo, tratándose de víctimas menores de edad, se estará a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 53 del Código Procesal Penal.

~~En caso de que un cónyuge o conviviente cometa alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 de este Título en contra de aquél con quien hace vida común, se podrá poner término al proceso a requerimiento del ofendido, a menos que el juez, por motivos fundados, no acepte.~~

55 Quedaría con la siguiente redacción:

Art. 390. El que, conociendo las relaciones que los ligan, mate a su padre, madre o hijo, a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes o a quien es o ha sido su cónyuge o su conviviente, civil o de hecho, será castigado, como parricida, con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado.

Si la víctima del delito descrito en el inciso precedente es o ha sido la cónyuge o la conviviente civil o de hecho de su autor o tiene o ha tenido con éste una relación de pareja sin convivencia, el delito tendrá el nombre de femicidio.

También comete acoso sexual el que hostigare a otra persona mediante gestos o expresiones verbales de carácter sexual explícito. En este caso, la pena será de una Unidad Tributaria Mensual.”

**Artículo 31.-** Introdúcese en el artículo 5 del decreto ley N° 3.500, el siguiente inciso tercero, nuevo:

“No tendrá la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivencia quien, perteneciendo al grupo familiar mencionado en el inciso primero, haya sido condenado o condenada por el homicidio o femicidio del o la causante.”<sup>56</sup>.

## DISPOSICIÓN TRANSITORIA

**Artículo transitorio.-** El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia, se financiará con cargo al presupuesto de las Partidas del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, del Ministerio de Salud y del Ministerio Público, según corresponda y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la Partida Tesoro Público. En los años siguientes se financiará con cargo a los recursos que disponga la respectiva Ley de Presupuestos del Sector Público.”



<sup>56</sup> Quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 5°.- Serán beneficiarios de pensión de sobrevivencia, los componentes del grupo familiar del causante, entendiéndose por tal, el o la cónyuge o conviviente civil sobreviviente, los hijos de filiación matrimonial, de filiación no matrimonial o adoptivos, los padres y la madre o el padre de los hijos de filiación no matrimonial del causante.

Cada afiliado deberá acreditar ante la respectiva Administradora, la existencia de sus eventuales beneficiarios, por los medios legales pertinentes.

No tendrá la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivencia quien, perteneciendo al grupo familiar mencionado en el inciso primero, haya sido condenado o condenada por el homicidio o femicidio del o la causante.